

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

8ª REUNIÓN

7ª SESIÓN ORDINARIA

15 de marzo de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de marzo de 2017, siendo la hora 15 y 49:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro abierta la 7ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.

Invito al señor legislador Carlos Presas a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Presas procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.

Solicito se incorpore como coautores del proyecto 21172/L/17 a todos los legisladores del bloque Córdoba Podemos.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores Somoza y Serafín como coautores del proyecto 21231/L/17.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.

Sr. Vissani.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 21052/L/17 pase a la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.

Sra. Gazzoni.- Gracias.
Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Rins como coautor del proyecto 21248/L/17.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto 21274/L/17 a los legisladores Peressini, Vilches y Somoza, y a los legisladores del bloque Córdoba Podemos.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores de los proyectos 21272/L/17 y 21260/L/17 a los legisladores del interbloque de Cambiemos, del bloque Córdoba Podemos y a los legisladores Salas y García Elorrio.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Papa.

Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras del proyecto 21241/L/17 a las legisladoras Bustos y Trigo, y como coautor del proyecto 21242/L/17 al legislador Campana.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto 21250/L/17 a los legisladores del bloque Córdoba Podemos.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto 21293/L/17 a los legisladores Salas y Vilches.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del proyecto 19925/L/16 a los legisladores del bloque Córdoba Podemos.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.

-4-

Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 12, 13, 25, 70, 71, 102 y 103 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 12, 13, 25, 70, 71, 102 y 103 del Orden del Día

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-5-

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que el proyecto correspondiente al punto 122 del Orden del Día vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 122 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-6-

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúa en uso de la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 34, 36, 41, 42, 59, 63, 83, 90, 98 al 101, 104 al 114, 116, 118, 119, 120, 136 y 139 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador Gutiérrez, ¿puede ser también el proyecto correspondiente al punto 121? Nos acaban de informar de la incorporación.

Sr. Gutiérrez.- Sí, correcto.

Sr. Presidente (Llaryora).- Bueno, sumamos el punto 121.

En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 34, 36, 41, 42, 59, 63, 83, 90, 98 al 101, 104 al 114, 116, 118, 119, 120, 121, 136 y 139 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-7-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 94 al 97 y 115 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 94 al 97 y 115 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.

-8-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 4, 6 al 11, 14 al 24, 26 al 33, 35, 37 al 40, 43 al 58, 60, 61, 62,

64 al 69, 72 al 82, 84 al 88, 91, 92, 93, 128 al 135, 137, 138, 140 al 143 y 145 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 4, 6 al 11, 14 al 24, 26 al 33, 35, 37 al 40, 43 al 58, 60, 61, 62, 64 al 69, 72 al 82, 84 al 88, 91, 92, 93, 128 al 135, 137, 138, 140 al 143 y 145 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que se agregue al bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto 18302/L/17.

Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.

-9-

Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en los pliegos para tratamiento en la presente sesión, cuyos números son: 20921, 21133, 21005, 21003, 21004, 21006 y 21007/P/17, omitiremos los discursos a viva voz de los miembros informantes, y por Secretaría se incorporarán los fundamentos al Diario de Sesiones.

FUNDAMENTOS

Pliego 20921/P/17

Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 20921/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Marcelino Antonio Morales, DNI 17.845.308, Juez de Ejecución Penal Reemplazante del Juzgado de Ejecución Penal Número Tres de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo 49, de fecha 15 de diciembre de 2016, contando con despacho favorable.

El abogado Morales resultó en segundo lugar en el orden de méritos para Juez de Control en lo Penal Económico confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.

El acuerdo requerido a esta Legislatura fue resuelto en función del Acuerdo 37 de fecha 2 de septiembre de 2016, y el precedente constituido por el Acuerdo 17 de fecha 27 de julio de 2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de Magistrados y Funcionarios

reemplazantes en el sentido de que, cuando no exista en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes –del cargo específico o afin- de concursos realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones por esta Legislatura.

En este caso, el padrón vigente fue aprobado por esta Legislatura mediante Resolución 2913 de fecha 9 de marzo de 2016, y el orden de mérito definitivo del concurso en el cual participó el doctor Morales fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego, trámite de ley en octubre de 2016, cuando el padrón se encontraba ya aprobado.

Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo y aquél para el cual concursó el doctor Morales.

El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1991.

En cuanto a sus estudios de posgrado, el doctor Morales es especialista en Derecho Penal Económico.

Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática diversa, pero siempre relacionados al fuero penal.

En el año 1991 ingresó al Poder Judicial de la Provincia, desempeñándose como escribiente y, actualmente, desde el año 2012 se desempeña en el cargo de Secretario Letrado del Juzgado de Control en lo Penal Económico, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Marcelino Antonio Morales Juez de Ejecución Penal Reemplazante del Juzgado de Ejecución Penal Número Tres de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Muchas gracias, señor presidente.

Pliego 21133/P/17

Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el expediente 21133/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Fernando Epelde Paygés, DNI 24.357.016, Fiscal de Instrucción y de Familia en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Marcos Juárez, contando ya con despacho favorable por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

El abogado Epelde Paygés resultó en octavo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura para Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple para el interior provincial.

El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006.

Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos de diferentes temáticas, en general referidas a cuestiones en materia penal.

En calidad de disertante y expositor concurrió a cursos, talleres y capacitaciones, todos ellos vinculados de modo directo con el fuero penal.

En el año 1994 el doctor Epelde ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba desempeñándose como meritorio, y desde el año 2012 hasta la fecha, se desempeña como Secretario de la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la ciudad de Marcos Juárez.

Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad del doctor Epelde están por demás acreditadas.

Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Fernando Epelde Paygés, Fiscal de Instrucción y de Familia en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Marcos Juárez.

Gracias, señor presidente.

Pliego 21005/P/17

Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el despacho favorable que le diera la Comisión al expediente 21005/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Juan Manuel Fernández López, DNI 26.904.579, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas Número Diez de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba, según Acuerdo 40, de fecha 5 de septiembre de 2016.

El abogado Fernández López resultó en tercer lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la Magistratura para Juez de Control Capital.

El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006.

En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Fernández López es Profesor Ayudante de la asignatura Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de Córdoba.

Asistió en calidad de asistente a un sinnúmero de cursos de grado y posgrado, jornadas, seminarios y congresos con temática diversa, pero siempre relacionados al fuero penal.

Participó en calidad de expositor, disertante, coordinador, panelista y expositor en conferencias, seminarios, cursos y congresos relacionados de modo directo con el Derecho Penal.

En el año 2002 el doctor Fernández López ingresó al Poder Judicial de la Provincia desempeñándose como pasante en el Juzgado de Control Número Tres de la ciudad de Córdoba y, actualmente, desde noviembre de 2012 se desempeña como Prosecretario Letrado del Juzgado de Control de Lucha contra el Narcotráfico.

En cuanto a la publicación de obras científico jurídicas, el doctor Fernández López fue coautor de Impugnaciones en el Proceso Penal, editado y publicado por Alveroni en el año 2009; también fue autor del “Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba”.

Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor

abogado Juan Manuel Fernández López Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas Número Diez de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, según Acuerdo 40, de fecha 5 de septiembre de 2016.

Muchas gracias, señor presidente.

Pliegos 21003, 21004, 21006 y 21007/P/17

Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a: expedientes 21003/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada Susana Iris Ottogalli de Aicardi Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Séptima Nominación; 21004/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada Malvina Maffini Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Noveno Turno; 21006/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada Zulma Mariel Palmero Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Sexta Nominación; y 21007/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada Carla Olloco Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Quinta Nominación.

Todos estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Todas las postulantes resultaron elegidas de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo de la Magistratura, siendo el mismo el siguiente: la doctora Ottogalli de Aicardi resultó en sexto lugar; la doctora Palmero resultó en quinto lugar y la doctora Olloco en cuarto lugar para Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género; mientras que la doctora Maffini resultó en sexto lugar para el cargo de Asesor Letrado en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.

Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte constitucional las vacantes por renunciadas, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.

Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.

Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a las mencionadas letradas el pasado 14 de marzo del corriente año en el seno de la Comisión.

Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislado Fresneda.

Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.

Respecto a los pliegos que fueron tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, pedimos autorización para abstenernos en el tratamiento de todos los pliegos que serán tratados en la presente sesión.

Sr. Presidente (Llaryora).- El pedido de abstención será puesto en consideración antes de pasar a la votación en general.

Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.

En principio, solicito autorización para abstenernos en la votación de todos los proyectos, a excepción del 21005/P/17, el que vamos a votar negativamente, y quiero fundamentar la negativa.

En general, nos abstenemos porque no coincidimos con el método de elección de jueces, fiscales y letrados; consideramos que debe ser hecha por otra vía, que tienen que ser electos por el voto popular, que tienen que ser revocables. Bueno, ya hemos explicitado nuestra posición sobre este tema, y nos abstenemos para no votar negativamente a una persona sobre la cual no conocemos, en principio, ningún impedimento.

Pero, en el caso del pliego contenido en el proyecto 21005, en el que el doctor Juan Fernández López está propuesto como Juez de Control y Faltas número 10 de la ciudad de Córdoba, sí lo rechazamos porque tiene un proceso abierto por administración fraudulenta de una asociación, y ese proceso -que viene del 2013-, en principio, había estado archivado hasta que la Cámara de Acusación -con un fallo del 24 de noviembre del año pasado- plantea al Fiscal que deben llevarse adelante las investigaciones porque entiende que hay comisión -según la imputación que le hacen quienes lo denuncian- de una actividad fraudulenta, que incluso sobrepasaba las atribuciones que tenían los imputados, entre ellos el doctor Manuel Fernández López, al momento de ejercer parte de la conducción de lo que se llamaba Centro de Estudios Avanzados de Derecho, que era parte de la asociación Club del Derecho.

Fui a la comisión, discutimos el punto e incluso le consulté al doctor Fernández López. La Fiscalía ahora ha determinado que se designe abogado defensor; o sea, se ha iniciado todo el proceso, y como la decisión de esta Legislatura no puede ser técnica sino política, poner como Juez de Control a alguien que tiene un proceso judicial me parece que, a todas luces, es una irregularidad, ya que está condicionando incluso el propio desarrollo del proceso porque es alguien que puede intervenir en el seno de la Justicia con todos los elementos disponibles puesto que es parte del aparato judicial, e influir en el desarrollo de su propia causa.

Independientemente de que estamos en contra del método en general, y este caso en particular reafirma nuestra oposición al método, consideramos que en este caso, incluso con el método que aquí se emplea, esta persona no puede ser juez de la provincia. Esa es la razón por la cual vamos a votar en contra y llamamos a votar en contra.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.

Sra. Tinti.- Señor presidente: a diferencia del legislador Salas, los partidos que integramos el interbloque Cambiemos solicitamos la abstención en la votación de este pliego del doctor Fernández López.

En primer lugar, no vamos a entrar en el hecho que se denunció porque creemos fervientemente en la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, y lo sostenemos expresamente en este caso; pero hubiéramos preferido que el pliego fuera tratado una vez que se finalice la investigación que la Cámara de Acusación ordena en este caso.

El 13 de mayo de 2016, el doctor Fernández López presenta la declaración jurada que prevé la Ley 8802; el 29 de julio de 2016 rinde la evaluación escrita en el Consejo de la Magistratura; el 2 de septiembre de ese año tiene lugar la entrevista personal; el 5 de septiembre de 2016 se confecciona el orden de mérito para la cobertura del cargo de Juez de Control, quedando el doctor Fernández López en tercer lugar; es decir, rindió un excelente examen. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2016, por auto 681 de la Cámara de Acusación, se resolvió revocar el archivo de una denuncia que había tenido en el año 2013 el doctor Fernández López. Esa denuncia fue decidida por los vocales por unanimidad, y afirmaron que se debía continuar con la investigación del hecho, relacionado con la posible comisión de un hecho defraudatorio.

Por ese tema es que solicitamos la abstención, sin perjuicio de que sostenemos el principio de inocencia hasta que no se determine lo contrario.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches. Señor presidente: solicito la abstención en todos los pliegos en tratamiento por los argumentos y fundamentos que ya hemos esgrimido en esta Cámara.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el 11 de diciembre de 2011, cuando me senté por primera vez en este recinto, en la sesión preparatoria se planteó una situación: la impugnación del diploma de un señor legislador que se encontraba imputado en la Justicia.

Diciembre de 2011: no me había alcanzado a acomodar en esta silla y ya tenía que opinar sobre un tema de esa trascendencia.

Como usted sabrá, la única cosa que impide que un legislador sea incorporado a una Cámara es una condena.

Un ciudadano se puede encontrar, en el sistema penal, en cuatro posiciones: denunciado, imputado, elevado a juicio o condenado.

Si a los legisladores se nos exige estar condenados para impedir que nos sentemos aquí, a este joven Fernández López lo estaríamos privando de acceder al cargo por una denuncia, ¿está claro? Por eso, hay que tener mucho

cuidado –y lo planteamos muy bien en la comisión- cuando se tratan estos temas, porque van a venir designaciones de otros jueces que están denunciados -si hay algo que sobre en el Poder Judicial de Córdoba son jueces denunciados-; entonces, la comisión debe tener un criterio válido para todas las circunstancias.

Repito las cuatro posiciones: denunciado, imputado, procesado o elevado a juicio y condenado; a los legisladores se nos exige estar condenados para privarnos de sentarnos aquí. Este muchacho tendría, por la información que estamos captando, una denuncia que viene del año 2013, donde el fiscal interviniente, por lo que ha ordenado la Cámara a los fines de los actos procesales que son irreproducibles –pericias y esas cosas-, lo invita a tomar un abogado; o sea que es de esperar que todavía no lo imputen, sino que estarán a resulta de lo que digan las pericias que se van a hacer. Jurídicamente, no habría forma, por el principio de equivalencia entre los poderes de la Provincia, de aplicar un rasero a un legislador y otro a un juez de la Provincia.

Hasta aquí la lectura jurídica del tema, porque está en el medio el principio de inocencia.

Entiendo los pedidos de abstención que se han hecho, porque dicen: “si te voto a favor puede haber un inconveniente, y si te voto en contra puedo estar afectando tu principio de inocencia”.

Saltamos de lo jurídico a lo político, al análisis político que tiene que hacer esta Cámara frente a esta designación. Uno no sabe cuál es la entidad del problema que hay entre ex integrantes de un Club del Derecho -hemos visto que hay un problema, que se han peleado los integrantes de un Club del Derecho.

Creo que no hay ningún inconveniente en dar el acuerdo para esta designación porque si el doctor Fernández López es imputado y, después, elevado a juicio por cualquier delito, el Superior Tribunal de Justicia va a pedir el juicio político; entonces, ¿para qué adelantarnos en el análisis de esa cuestión?

Otro argumento que analizamos es que la denuncia es de 2013, y no se pueden dilatar los procesos eternamente. Si la Justicia demora casi 4 años en blanquear su situación, a eso no lo puede pagar el ciudadano –además, él está en la carrera judicial.

Por eso, sin tomar partido por ninguno y tan solo pensando en que van a venir nuevos casos iguales, de jueces denunciados, en la más amplia protección del principio de inocencia, vamos a votar afirmativamente.

Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor legislador Isaac López, para el cierre del debate.

Sr. López, I.- Gracias, señor presidente.

Simplemente, lo que queremos hacer es una defensa irrestricta del principio de inocencia que rige en nuestra Constitución Nacional.

Nos parece que cuando uno evalúa este pliego en particular puede ver que se han cumplido todos los requisitos objetivos en cada una de las instancias -al momento de concursar y en los registros de oposiciones donde pueden presentarse instituciones y particulares a oponerse a determinadas

designaciones-; además, ha rendido con criterio, ha superado los exámenes escritos y la evaluación oral sujeta al Consejo de la Magistratura.

Como decía el legislador preopinante, se trata de una denuncia del año 2013. Entendemos que siempre tenemos que manejarnos con criterios objetivos.

Es la primera vez, en este más de un año que viene trabajando la Comisión de Asuntos Institucionales con los mismos integrantes, que se nos presenta un hecho de estas características. Decidimos pasar a cuarto intermedio y discutirlo una semana más. Tomamos la decisión, desde nuestro bloque y desde otros bloques que nos han acompañado para que salga el despacho y se pueda tratar el día de hoy, de votar en forma afirmativa por los argumentos que se han esgrimido, por considerar –repito- el principio de inocencia de manera irrestricta y por suponer que siempre existe la posibilidad de que, en caso de que prosigan las investigaciones judiciales y se supere la mera sospecha que basta para una imputación, se pueda llegar a una condena. En esos casos, también, la Constitución y las leyes prevén las herramientas necesarias para superar los conflictos que se puedan crear por una persona que ha sido designada.

Por todo esto, adelanto el voto positivo de nuestra bancada.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de abstención solicitadas.

El bloque Córdoba Podemos solicitó abstenerse en la votación de todos los pliegos.

El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores solicitó abstenerse en la votación de todos los pliegos, excepto en la del 21005, para el cual vota negativamente.

El Interbloque Cambiemos solicitó abstención en la votación de todos los pliegos, al igual que el bloque PTS Frente de Izquierda.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Llaryora).- No, el legislador García Elorrio fundamentó su voto positivo.

En consideración las mociones de abstención mencionadas.

– Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.

En consideración los pliegos mencionados.

– Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.

Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto 125 del Orden del Día, proyecto de ley 20920/E/17, que cuenta con despacho de comisión.

Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.

Vengo a fundamentar el proyecto de ley 20920/E/17, que consiste en un convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las empresas Automóviles Argentina y Fiat Chrysler Automóviles Brasil, por el cual, mediante una carta intención del 5 de abril del año 2016, se ha suscripto el convenio –reitero- conforme a las necesidades y acuerdo de ambas partes, el 11 de noviembre del año 2016, el que sometemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo.

El convenio habla de las obligaciones que asumen las dos partes, que son las empresas y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por el lado de las empresas se prevé una inversión de 500 millones de dólares para crear un nuevo vehículo que se producirá íntegramente en la Provincia de Córdoba, comprometiéndose, además, a comprar todos los componentes a proveedores locales, a suscribir con los mismos la asistencia técnica pertinente y a procurar la conformación de un cluster con los proveedores autopartistas de la Provincia de Córdoba.

En tanto, la Provincia se compromete a asegurar la productividad de la misma, a eximir a las empresas del pago de los Impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y de Sellos por un plazo de diez años, subsidiando el 25 por ciento del incremento de la demanda de energía eléctrica por el plazo de tres años. A su vez, la Provincia le aplicará a este convenio con la empresa el beneficio de promoción industrial a todos los proveedores que se involucren con la producción de este nuevo producto, y ejecutará una obra de acceso a la empresa, así como capacitará al personal durante 14 meses con una inversión de 6 millones de pesos, convenio en vía de suscripción también con el Gobierno Nacional.

Por estos motivos, solicito a mis colegas compañeros de las distintas bancadas que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Gracias.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.

Desde ya adelantamos que el voto del PTS-Frente de Izquierda va a ser negativo.

Es claro y evidente que si a Fiat Chrysler, por una inversión de 500 millones de dólares, que se estima se ejecutará entre 2017 y 2021 –es decir cinco años- se le eximirá de impuestos por diez años, claramente sale ganando la empresa. Si a eso se le suma que las eximiciones corren también para el Impuesto Inmobiliario, el cual acaba de ser aumentado a fines del año pasado con la votación de todo el paquete de leyes impositivas en alrededor de un 30 por ciento, caemos nuevamente en la cuenta que quien gana es la empresa.

Si se decide descontarle el 25 por ciento de excedente en lo que la empresa gaste de energía eléctrica, mientras que a los usuarios que andamos de a pie en todo el país se nos aplicó un aumento interanual que ronda el 50

por ciento, la que gana, una vez más, es la empresa; solamente en los últimos dos meses hubo un aumento de alrededor del 13 por ciento.

Si en el tema de Ingresos Brutos se exige a una empresa que tiene como beneficio neto anual 10.000 millones de dólares, es evidente que se está beneficiando a la empresa.

Pero es un poco raro que, ante todos estos beneficios, no haya explicitación –incluso para aquellos que alegan la defensa de la economía y la producción nacional- ni siquiera de qué cupo de autopartes tendrá que incorporar este nuevo vehículo, que es parte de las condiciones que se le exigen a Fiat Chrysler; tampoco se dice absolutamente nada sobre las garantías laborales que se le exigirán frente a estas eximiciones y condonaciones. Esto es llamativo porque es claro, y es un dato conocido por todos los analistas, que la industria automotriz es una de las industrias que mayor volumen de importación genera agrandando el déficit comercial de Argentina.

Con respecto a los trabajadores, de quienes nada se dice, ni siquiera se comprometen a no despedir, ni suspender. De hecho, la propia Fiat, la semana pasada anunció la suspensión del 70 por ciento de su personal que, como ya sabemos -y desde el PTS-Frente de Izquierda con nuestros compañeros en la industria automotriz lo hemos denunciado constantemente- significa rebajas salariales.

En el caso de esta empresa, además de recortarle a los trabajadores, se le está ofreciendo y se le habitó, habilita, o se le habilitará -da lo mismo, no sé si ya habrán empezado o no con la construcción- un acceso por la vía circunvalación que significará alrededor de 10 millones de pesos.

Eso en una provincia y en un país donde para las trabajadoras docentes que vienen de denunciar la violencia económica, que venimos de realizar un paro la semana pasada por nuestras demandas, significaría que se les podría llevar el salario a 20 mil pesos; es decir, un salario que está rozando la canasta básica familiar a alrededor de 5 mil docentes. Es claro, entonces, a quién beneficia este convenio.

Por eso, desde nuestra bancada queremos dejar bien claro que este tipo de convenios, de acuerdos -y no nos sorprende que quien haya sido miembro informante sea una legisladora de Cambiemos-, es un anticipo de lo que se impone o pretenden imponer como ajuste para los trabajadores de la industria automotriz en todo el país.

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.

Ya escuchamos los anuncios del Presidente Macri que quiere hacer de los convenios automotrices un nuevo “Vaca Muerta sobre ruedas”, es decir, un ataque brutal a las condiciones de trabajo.

Pero también hay que decir que no es casual que eso se implemente y se haya anunciado, y se vaya a difundir con bombos y platillos, desde nuestra Provincia, con el eximio aliado que viene teniendo el Gobierno de Macri que acá, de la mano del SMATA, ya reventó los convenios laborales de los trabajadores.

En Fiat ya destruyeron los convenios de trabajo de los obreros y eso significó reducciones salariales de entre el 15 y el 30 por ciento en algunos

casos, significó la quita del comedor; después, avanzaron con Renault. Entonces, lo que buscan en nuestra Provincia es avanzar con aquellos trabajadores que resistieron, como es el caso de los trabajadores de Volkswagen, donde están nuestros compañeros que han sido parte de la oposición, pero quieren imponerlo en todo el país. El anuncio y las suspensiones de 600 operarios en Volkswagen Pacheco es un anticipo de esto. Meter miedo para imponer este convenio a la baja de los trabajadores.

Cuando se anuncian este tipo de acuerdos, que ya lo hemos visto en nuestra Provincia un montón de veces, con la excusa del aumento de la productividad de los trabajadores, sabemos que el mismo significa, por un lado, despidos, suspensiones, retiros voluntarios que son despidos encubiertos. Por otro lado, una situación que se agrava cada vez más entre la clase trabajadora con laburantes de 30 años que están literalmente rotos por los ritmos brutales de producción. Venimos del caso de los trabajadores de la Coca Cola, que denuncian despidos discriminatorios, justamente, por tener enfermedades laborales, 30 años y tienen hernias de disco que ni siquiera les permiten alzar en brazos a sus hijos. Eso es lo que significa el aumento de la productividad; eso significa que, por ejemplo, en Fiat, en 2012, un año de producción record, con 3.500 operarios sacaron 315 autos por turno; en 2017, con 1.000 operarios menos, es decir 2.500 operarios, sacaron por turno 327 autos, más autos con menos obreros y sin inversión en maquinarias que sea realmente importante y de peso.

Y, después, con estos aumentos de los ritmos y aumento de la productividad, que termina con montones de obreros “rotos” –como los llaman en las fábricas–, hablan y defienden la política de ir contra la industria del juicio y de las A.R.T., como si los obreros estuvieran encantadísimos de andar defendiéndose porque tienen 30 años y, como decía, no pueden alzar a sus hijos e hijas.

Entonces, sabemos que ninguno de estos convenios, de estos anuncios, significa una mejoría para los trabajadores, sino que lo que quieren imponer son despidos, suspensiones y mayor precarización para los que queden o entren con nuevos convenios “basura”.

Por eso, desde el PTS decimos que no tiene que haber ni un solo despido, ni una sola suspensión y que, al contrario, lo que hay que hacer es repartir las horas de trabajo; que las empresas, de una vez, tienen que pagar con sus ganancias y afectar las que se llevaron durante años y en “pala”; que la jornada laboral no puede superar las 6 horas de trabajo, es decir que hay que reducir la jornada laboral y que realmente se repartan esas horas; que no se deba trabajar más de 5 días a la semana para que todos los trabajadores no sólo no tengan enfermedades laborales sino que, además, en el caso de la juventud, que es la que está siendo brutalmente explotada, tenga derecho no solamente al trabajo sino al estudio y al esparcimiento.

Consideramos que es imprescindible que la clase trabajadora de nuestra Provincia y del país, entienda que hay que rechazar estos convenios que implican mayor precarización y, obviamente, fortalecer la perspectiva –que es por la que peleamos– de organización dentro de los lugares de trabajo y de estudio, y el rechazo brutal a estos acuerdos de los partidos patronales y las empresas a quienes benefician.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solamente deseo aportar como complemento –ya que como presidente de la Comisión de Industria he sido miembro informante– y explicarle, a través suyo, a la legisladora preopinante que, simplemente, la aprobación de ese convenio implica la generación de nuevos puestos de trabajo. La industria metalmecánica para provincias como Córdoba no es una precarización laboral. Me extraña que no sepamos cuán importante es esta industria para nuestra Provincia que, solamente entre Buenos Aires y Córdoba, generan nada más y nada menos que 120 mil puestos de trabajo al día de hoy, y con un convenio como el que se pretende aprobar habrá más y mejores puestos de trabajo; lejos está de la precarización laboral.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: lamento informarle a la legisladora El Sukaria que Fiat no dice lo mismo.

Es interesante lo de este convenio porque acá discutimos muchas veces los convenios de este tipo en otros períodos legislativos y siempre se nos dijo que era una forma de desarrollar la industria y el trabajo. Pero Fiat avisó que no va a tomar trabajadores nuevos y que no va a generar puestos de trabajo; que su inversión de 500 millones de dólares tenía el objetivo de mejorar o provocar una automatización mayor, es decir, lo más probable es que se quede con menos trabajadores porque va a instalar un sistema de producción más moderno. Precisamente, esas fueron las declaraciones del presidente de la Fiat quien, además, se destaca por ser muy locuaz y lo dijo con toda claridad.

En el convenio en tratamiento no se dice que se crean puestos de trabajo, mientras que en convenios anteriores había un compromiso de nuevos puestos. No obstante, sabemos que las empresas se quedaban con todos los beneficios y los nuevos puestos de trabajo eran pocos. Para fundamentar lo que digo debo mencionar un pedido de informes elaborado por nuestra bancada por el que solicitábamos nos informaran cuánto habían utilizado las empresas del beneficio que se les otorgaba correspondiente a sueldos, y ninguna había utilizado lo que se les había ofrecido. Sin embargo, los demás beneficios, como exención impositiva, inversiones, etcétera, sí los habían utilizado.

Entonces, lo que está en discusión es el costo que existe para la Provincia, tal como lo señaló la legisladora informante del proyecto, en cuanto a las eximiciones impositivas, y si eso va a implicar un desarrollo para la Provincia y la industria metalmecánica. Ese es el punto que debemos discutir: ¿hay que hacer un esfuerzo para que haya más puestos de trabajo y para que la industria se desarrolle?

Al respecto, debo citar al Ministro Avalué, quien dijo que la Argentina tiene una instalación y una capacidad productiva para producir un millón de autos al año, pero produce 470 mil. Es decir, la inversión no tendría por qué aumentar la capacidad productiva. Los datos muestran que sólo se usa el 60,6 por ciento de la capacidad instalada; entonces, ¿para qué vas a invertir más?, ¿para que en lugar de 60,6 tengas el 30,4? Ningún capitalista es tan tonto

como para invertir en algo que no va a poder producir. O sea, nos sobra capacidad para producir.

Está clarita la cuenta: el Ministro dijo un millón –debe ser así-, y se producen 469 mil. Es decir, nos sobra capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es el punto? No podemos poner a producir a toda esa capacidad instalada, y acá viene el problema central. En ese sentido, el jueves de la semana anterior se publicó una nota en el diario el Cronista Comercial que se titula: “Automotrices reclaman incentivo tributario para poder incrementar la producción este año”; y afirman que el problema es el costo tributario y el costo laboral; pero, ¿de qué costo laboral hablan? Plantean comparaciones con otros lados, pero también hagamos la comparación de cuánta plata se llevó Fiat y cuánto gana.

En 2014, la entonces legisladora Frencia destacó la ganancia de las empresas automotrices. El grupo Volkswagen, en el 2012, había tenido una ganancia neta a nivel mundial de 21 mil millones de euros, limpios, al bolsillo. Renault, por su parte, a la que le había ido mal, había tenido 900 millones de euros de ganancia y el otro, al que le había ido un poquito mejor que a Renault, tuvo 1200 millones de euros de ganancia. La “juntaban en pala”, como dijo De la Sota y como dijo Cristina de Kirchner.

Entonces, como “la juntaron en pala” es evidente que no la invirtieron, y ahora esas inversiones tienen que ser sostenidas por una intervención del Estado que debe poner guita todo el tiempo. Son parásitos.

Acá no hay costo laboral, sino que se trata de costo empresarial. Es extraordinario que los que defienden el régimen capitalista y el liberalismo económico no se den cuenta de que toda esta gente, si no les bajás los impuestos y si no les otorgás subsidios o no les ponés guita encima, si no les garantizás lo que ellos quieren, nada de nada. Y la inversión no va a ser para producir puestos de trabajo sino por la competencia obligada de las empresas, porque con un mercado que se achica...

Señor presidente: le pido por favor que solicite se guarde silencio porque a mi lado hay una “convención” y no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo.

Sr. Presidente (González).- Por indicación del legislador Salas, solicito silencio en el recinto.

Sr. Salas.- Volviendo a lo que decía, el problema central es que la inversión no va a traer un aumento de la producción de autos porque, por otro lado, el mercado al está destinado, que es fundamentalmente el brasileño, está en bancarrota, y el problema internacional en general está así. Por eso toda esta gente reclama una devaluación -son los campeones en esa materia- y muchísimas cosas más, son carísimos; es mantener gente parásita y muy cara que no redunde en puestos de trabajo.

Le voy a aclarar a la legisladora informante que sí viene la precarización; como señaló la legisladora Vilches, a esto se le llama “Vaca Muerta sobre ruedas” porque firmaron un convenio petrolero que, en un importante sector, tiene una reducción del 50 por ciento en los ingresos que perciben los trabajadores; pero, como son derechos adquiridos, se va a aplicar a los nuevos, entonces, empezaron a “rajar” a los viejos, de manera tal que todos sean nuevos, y esto no es algo ajeno, está sucediendo en Córdoba.

Nissan firmó un acuerdo con el SMATA y éste se entregó para que los trabajadores que vengan a producir en los años 2017 o 2018 –eso se va pasando todo el tiempo, está peor que el Kempes, cada vez empieza más lejos-, parece que en el 2018, cuando empiecen a producir lo van a hacer con trabajadores que van a ganar el 15 por ciento menos y con condiciones de trabajo cambiadas en el comedor, etcétera, que los va a hacer más productivos y va a existir, pero para los nuevos.

Vayan a Renault y vean cuánta gente menos hay; el 30 por ciento –pero debe ser más- de los trabajadores mecánicos, no metalúrgicos, se acogió -todo esto entre comillas- al retiro -más comillas todavía, triple comillas- voluntario, que de voluntario no tiene nada, son despidos encubiertos. El sueldo menor va a ser para la mayoría de los trabajadores; eso es precarización porque van a haber trabajadores con menos sueldo. Y ese es el acuerdo que firmó el Presidente –tendría que ver los detalles- y que todos acompañaron, no es un acuerdo para que se produzcan más autos, no es para que haya más trabajo en la industria mecánica, es un acuerdo para beneficiar y maximizar las ganancias de las corporaciones automotrices que, aparte, son todas multinacionales, no destinan un peso a inversión, hay que hacerles todo y al costo laboral y tributario lo vienen a comparar con otros países, pero de acá no se fue ninguna, se quedaron todas con este costo, se ve que hicieron negocio y en forma.

Ahora, como se cayó el mercado quieren limpiar gastos y le dicen al Estado: “hacete cargo de los impuestos, total los terminan pagando los trabajadores porque son todos impuestos al consumo, y si ya tenés un impuesto al consumo, encajo uno a las ganancias: cuando ganás un salario por arriba de los 20 o 25 mil pesos, y te encajo un impuesto a los servicios”, y le dan a los laburantes para compensar lo que dejan de pagar los que se llevan la “guita” porque el Estado les ha dado todo servido; son parásitos.

Cuando se dice que en la Argentina no hay cultura del trabajo es para atacar a la gente que hace cortes para pedir un laburo, y dicen: “viven de planes, ¡qué vergüenza!”. En la Argentina no hay cultura del trabajo porque la clase capitalista es vaga y parásita, no pone un mango si no recibe cinco; esa es la realidad, ese es el tendal que dejan.

Este convenio, como el acuerdo automotriz nacional, tiene que ser rechazado, no produce desarrollo industrial, no se van a vender más autos porque no se van a producir más autos, va a producir despidos y va a producir bajas salariales.

Por todo lo expuesto, el bloque de Izquierda y de los Trabajadores rechaza el presente proyecto.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, he pedido la palabra para responderle a la legisladora informante que, desde ya, es miembro de la comisión, por eso informa. Pero es sintomático, es simbólico o como queramos llamarlo, que haga este anuncio el mismo día en que su Presidente, junto con el Gobernador, anuncia este acuerdo para toda la industria automotriz.

Con respecto a la precarización laboral, al hablar con cualquier operario de fábrica, como lo hacemos todos los días, uno se da cuenta de la situación de trabajo, que está caracterizada por la precarización laboral, baja de

convenios, quita de conquistas, como ya expresó el legislador Salas y ya hemos graficado amplísimamente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: negar la importancia de las terminales automotrices en Córdoba y la influencia positiva que han tenido sobre el desarrollo de la industria metalmecánica de las PyMEs cordobesas está fuera de toda discusión.

Las terminales vinieron a Córdoba porque antes el Estado había hecho una apuesta muy fuerte en lo que era la ex DINFIA para formar trabajadores en esta industria metalmecánica, lo cual facilitó que luego se instalaran las terminales automotrices porque Córdoba contaba con personal formado para este tipo de industrias.

Esto ha tenido una importancia inmensa sobre la economía de los cordobeses y sobre el intercambio cordobés en el Mercosur. Esto está fuera de toda discusión.

Ahora bien, el Gobernador no puede firmar este convenio porque va contra el artículo 104 de la Constitución Provincial, que considera que es resorte exclusivo, indelegable y excluyente de la Legislatura de Córdoba toda la materia impositiva. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho el Gobierno de la Provincia? Tendría que haber mandado el convenio tal como estaba proyectado y pedir la autorización correspondiente para que la Legislatura hiciera el acto jurídico de autorización. Eso hubiera servido muchísimo para evitar algunos abusos por parte de algunas empresas sobre los gobiernos en esta suerte de competencia de quién se queda con la radicación de empresas de este nivel.

Córdoba, de por sí, tiene una ventaja sobre el resto o, sobre buena parte de la Argentina, y es que tiene una red de PyMEs en la metalmecánica que facilita que cualquier empresa terminal automotriz o con cierto nivel de complejidad de producción tenga todo lo que necesita para radicarse.

En concreto, si el Gobernador hubiera hecho lo que tenía que hacer, es decir, mandado a la Legislatura el convenio, habríamos discutido un par de cláusulas de ese convenio, sobre todo para romper el ciclo vicioso que tienen estos convenios. Tienen un círculo virtuoso en cuanto mueven a la industria metalmecánica, pero tienen un círculo vicioso que es que ante la primera coyuntura económica, las empresas suspenden trabajadores, las empresas adelantan vacaciones, en definitiva, le quitan al trabajador todo tipo de previsibilidad.

Entonces, ¿cuál sería el camino? Se podría haber firmado un convenio con autorización de la Legislatura, donde parte de lo que la Provincia de Córdoba –y es mucho, señor presidente- está cediéndole a las empresas quedara en un fondo fiduciario para sostener los problemas, ya sean estacionales o asimétricos de la economía del Mercosur, para que nunca se disminuyera el nivel de ingreso a los trabajadores y pudieran tener previsibilidad porque, como usted sabrá, señor presidente, sin trabajo no hay familia y sin familia no hay Nación.

Por estas razones, porque en los cinco años que llevo siendo legislador no he votado ni ratificado ningún decreto del Poder Ejecutivo donde se hubiera

hecho uso de las facultades excluyentes del artículo 104, estoy pidiendo que se considere mi voto negativo.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se autorice la abstención de mi bloque Córdoba Podemos puesto que el año pasado, cuando se trabajó el presente proyecto, fue hecho por quienes hoy no integran el bloque y quienes reemplazan a los que integraban el bloque en dicha comisión aún no hemos sido notificados a los fines de poder integrar esta comisión.

Por una cuestión de seriedad y respeto a quienes trabajaron en comisión pedimos la abstención del bloque y que se nos notifiquen de las reuniones siguientes de la Comisión de Industria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el legislador Fresneda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Calvo.

Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, por supuesto que el bloque de la mayoría va a acompañar el presente proyecto de ley, pero también quiero decir algo que no se dijo en la discusión que se viene llevando adelante en el recinto: el presente convenio tiene como principal objetivo la creación de un nuevo vehículo en la Provincia de Córdoba.

No voy a ahondar en la historia y la importancia que tiene Córdoba en la industria automotriz de nuestra Argentina, siendo una de las pioneras a nivel nacional, no sólo en la construcción de vehículos sino también de autopartes para los componentes de los vehículos que se fabrican fuera de la Argentina. Nuestra Provincia siempre ha trabajado por la importancia productiva que se le ha dado a este sector industrial y también por la mano de obra calificada con la que cuenta para llevar adelante este tipo de productos, tanto acá como en toda la Argentina.

Antes de tomar alguna valoración política sobre esto, y para responder al legislador García Elorrio respecto a que el Gobernador no tiene atribuciones para firmar un convenio, debo mencionarle que nosotros no coincidimos con él, porque en el marco del artículo 144, incisos 4) y 14) de la Constitución provincial, el Gobernador tiene todas las atribuciones para enviar este tipo de convenios a discusión en el seno de la Legislatura provincial. Por lo tanto, no quería dejar pasar esto para que no queden dudas sobre cuál es la constitucionalidad que tiene el presente proyecto de ley que estamos tratando hoy en el recinto.

Como ustedes saben, nosotros no somos parte de este Gobierno nacional; Unión por Córdoba viene gobernando hace 17 años y llevando innumerables acciones para mejorar la calidad de vida de los cordobeses, y siempre dijimos que íbamos a acompañar al Gobierno nacional en todas las

acciones que tuvieran que ver con la preservación del empleo, y para avanzar y darle la institucionalidad que el Gobierno nacional necesita para llevar a los argentinos por el buen camino.

En este sentido, nosotros, más allá de que no estamos convencidos que el mercado resuelve todos los problemas, sí creemos que el Estado tiene que estar presente para aportar y salvaguardar, fundamentalmente, los puestos de trabajo en una industria que es tan importante para nuestra Provincia.

Creo que la llegada de la producción de un nuevo vehículo a nuestra Provincia es muy importante, no solamente para la empresa Fiat y para la economía industrial, sino para todas las autopartistas que trabajan a partir de la producción de un nuevo producto en nuestra Provincia.

En eso tenemos muchas diferencias –reitero-, no pertenecemos al mismo espacio político, pero estamos convencidos de que este es un paso adelante que necesitamos dar para avanzar en la preservación del empleo calificado que tenemos en nuestra Provincia.

Por lo antes mencionado, señor presidente, adelantamos el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba y le pido el cierre del debate.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración el cierre de debate solicitado por el legislador Calvo.

-Manifestaciones del legislador Peressini.

Sr. Presidente (González).- El legislador Calvo es el legislador que por la mayoría cierra el debate, dos o tres miembros de su sector han hecho tres discursos.

En consideración la moción de cierre de debate formulada por el legislador Calvo.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Por contar este proyecto con sólo dos artículos, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una sola votación, el proyecto 20920/E/17, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20608/E/17, que cuenta con despacho de comisión.

A continuación, se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 15 de marzo de 2017.

Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 20608/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo estableciendo que la Dirección General de Catastro será el organismo encargado de la protocolización definitiva de los planos de agrimensura y modificando la Ley 5771.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Trigo.

Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.

En el día de hoy estamos tratando el proyecto de ley 20608/E/16, por el cual se establece que la Dirección General de Catastro será el organismo encargado de la protocolización definitiva de los planos de agrimensura, y modificando artículos de la Ley 5771.

Este proyecto de ley fue tratado en reunión conjunta entre las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General el pasado martes 7 de marzo, donde pudimos contar con la presencia del Director General de Catastro y autoridades de dicha dirección y, además, funcionarios de la Dirección del Registro General de la Provincia.

Señor presidente: este proyecto de ley se encuadra dentro del proceso de revisión y adaptación de procedimientos y normativas vigentes que el Gobierno provincial está realizando y, en este caso en particular, la reformulación de la regulación legal se refiere principalmente a tres temas.

El primer tema es la reinstauración del proceso de protocolización de planos en la sede de Catastro, que actualmente la realiza el Registro de la Propiedad.

Esta reinstauración del proceso de protocolización de planos en Catastro presenta múltiples beneficios, entre los que podemos mencionar los siguientes: se optimiza y se hace más eficiente el proceso, a través de la simplificación de procedimientos y la incorporación de la tecnología; se facilita el trámite a partir de la intervención de agentes con formación específica en la materia; además, se vincula armónicamente y se interrelaciona en un único proceso transversal a las distintas reparticiones vinculadas a la materia inmobiliaria catastral, registral y tributaria; se reducen los tiempos y costos de ejecución de las operaciones. Asimismo, permite que el ciudadano pueda realizar operaciones jurídico inmobiliarias, individualizando perfectamente el objeto sobre el cual versa el negocio jurídico y, por último, se identifica el objeto y sujeto al que corresponde llevar adelante el cobro de los tributos.

Actualmente, son los escribanos quienes, luego de que la Dirección de Catastro visa los planos, se encargan del proceso de protocolización de los mismos para que luego sean llevados al Registro de la Propiedad para su correspondiente registro. Todo esto hace que el proceso sea sumamente lento, en perjuicio de los titulares de dominio que necesitan que este trámite se realice con mayor celeridad.

Con este proyecto de ley se está proponiendo que la participación de los escribanos para acreditar la validez de títulos, personarías, legitimidad y voluntad de los propietarios, además de los certificados de dominio, inhibición y gravámenes, sean presentados al iniciar el trámite, en conjunto con la presentación de los planos.

De ese modo, la Dirección de Catastro tomará la totalidad de los documentos necesarios para hacer tanto la visación de los planos como también la protocolización de los mismos, luego de un análisis de la documentación presentada.

Además, cabe destacar que en la reunión de comisión se dejó claramente expuesto que el presente proyecto posee múltiples beneficios, sobre todo en lo que concierne a la modernización y simplificación de los procesos: la comunicación de la protocolización entre Catastro y el Registro se realiza vía Web y permite un aumento en la eficiencia y una disminución en los tiempos, al compartirse electrónicamente la información.

Por todo lo dicho, también se verifica que con la aprobación de este proyecto ley se reduce considerablemente el tiempo para realizar el trámite desde el momento de ingreso, lo que permitirá que el legítimo propietario pueda disponer rápidamente de su inmueble, ya que se disminuyen considerablemente los plazos a través de los cuales se le asignarán al inmueble la configuración parcelaria, número de matrícula y número de identificación tributaria.

El segundo tema que trata este proyecto se refiere a la implementación de los planos de mensura cuando la superficie sea mayor al 5 por ciento o la vigésima parte de la superficie del asiento registral inmobiliario correspondiente a casos específicos. Es decir, se establecen procedimientos para la visación y protocolización cuando existan diferencias entre los títulos y las mensuras mayores al 5 por ciento.

Una de las modificaciones es que se pueden citar a los colindantes, además de otros puntos cuya regulación exceden las facultades que ambas reparticiones tienen asignadas por ley. De esta forma, se armonizarán criterios a fin de evitar discordancias entre los tratamientos catastrales y registrales.

Como tercer punto vale la pena mencionar, a partir de las modificaciones citadas, que se torna necesaria también la modificación de los plazos de vigencia de los certificados registrales y la comunicación de subasta, lo que conlleva a la modificación de los artículos 32 y 34 de Ley 5771, del Registro General de la Provincia. De este modo, se modifican los plazos, quedando el plazo de vigencia de los certificados registrales, que será de treinta días corridos para la autorización de documentos notariales, judiciales o administrativos, a excepción del certificado registral para subastar y del certificado registral para la protocolización de planos por vía administrativa, que será de 150 días corridos.

Respecto a la subasta judicial de inmuebles, se fija que la nota de comunicación de subasta no tiene plazo de caducidad y sólo podrá cancelarse por una disposición del mismo tribunal que lo ordena.

De esta forma, señor presidente, se observa que este proyecto de ley mejora el proceso de protocolización de planos, introduce novedades tecnológicas, regula situaciones de discrepancias entre títulos y mensuras, modifica la legislación pertinente para que el nuevo proceso sea realizado con éxito y con toda celeridad, tal cual lo disponen las necesidades de nuestros ciudadanos.

Todo esto beneficia exclusivamente a los propietarios de los inmuebles, que podrán realizar sus trámites –como dije anteriormente- con mayor celeridad, y podrán disponer de dichos inmuebles con mayor anticipación que en los tiempos actuales.

Dicho esto, adelanto el voto positivo del bloque Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo al presente proyecto, que cuenta con el apoyo de todos los sectores interesados - Colegio de Escribanos, etcétera-, que han manifestado –según nos han referido los funcionarios- que este sistema es superador, así que cuenta con nuestro apoyo.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.

Adelanto el voto positivo del bloque Córdoba Podemos al proyecto en debate.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.

Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el proyecto 20608/E/1, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

La votación en particular se hará por número de artículos.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 10.

Sr. Presidente (González).- El artículo 11 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-12-

Sr. Presidente (González).- Corresponde efectuar el tratamiento del punto 5 del Orden del Día, proyecto 18291/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Muchas gracias.

Señor presidente: el día de mañana hará exactamente un año que presentamos un pedido de informes para que se nos informe en qué situación se encontraban los programas que atienden la problemática de ancianidad en nuestra Provincia. En su momento, lo dirigimos al Ministro de Desarrollo Social, Rufeil, pero a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta.

Tal pedido de informes era muy simple y tenía como objetivo encontrar respuesta ante la crisis que en el verano se había provocado en el Programa de Adultos Mayores de la Provincia, porque resulta que miles de adultos mayores -que en nuestra Provincia se encuentran en la indigencia- no tenían la cobertura alimentaria mínima a la que por Ley 7077 tienen derecho a acceder.

Claramente, en el proyecto de ley argumentábamos el peligro que corre el programa, producto del vaciamiento ejecutado por parte del nuevo gobierno de Schiaretti, en su momento, a toda la política de desarrollo social de la Provincia, con recortes progresivos que vaciaban los contenidos de dichos programas.

El Programa 659 y el Subprograma 4 -que atienden a la problemática de los adultos mayores- en la actualidad solamente tiene presupuestado 2 millones de pesos, en el año 2013 tenía 30 millones de pesos, y en 2015 sólo 7 millones. Es decir que en el transcurso de los últimos años el Gobierno fue

vaciando conscientemente el Programa de Adultos Mayores. ¿Será que la actual directora...

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.

Ruego silencio en el recinto. Es imposible seguir al orador en estas condiciones.

Continúe, legislador.

Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.

Espero que presten atención, porque seguramente tendrán alguna respuesta ante esta situación, que si bien no la han presentado por escrito en un año, esperamos que puedan hacerlo de manera oral, porque se encuentran en riesgo nuestros adultos mayores que están abandonados por el Estado, y que terminan en la indigencia como producto de la aplicación de una política consciente –como dije recién- de recorte presupuestario, percibiendo, además, jubilaciones de miseria, tanto a nivel provincial como nacional.

En marzo de 2016, presentamos un proyecto porque se generó una crisis debida a que los módulos del PAICor se los estaban entregando a nuestros abuelos, pero los 81 comedores que existían en ese momento no estaban funcionando.

No solamente la situación es muy frágil para nuestros adultos mayores, sino también para todos los trabajadores precarizados que tiene el Ministerio de Desarrollo, porque hay miles de trabajadores que son becarios; o sea, los trabajadores que atienden a la problemática de adultos mayores en nuestra provincia son simplemente becarios que no tienen ningún tipo de relación de dependencia y se encuentran flexibilizados y precarizados por el Estado. Es así que, claramente, el Gobierno –si no nos informa lo contrario- no estaría cumpliendo con la Ley 7077, votada en 1984, o se estaría cumpliendo de manera muy precaria.

Queremos saber cuántos albergues y cuántos hogares de día hay para nuestros adultos mayores, cuántas viandas reparte el Ministerio de Desarrollo para paliar el hambre al que se somete a nuestros abuelos. Supuestamente, la ley permitiría una ayuda económica para el grupo familiar para mantener a los abuelos dentro del núcleo familiar. Además, ¿cuántos geriátricos habilitados hay en nuestra provincia para que nuestros abuelos puedan tener una vida y una ancianidad dignas?

Sabemos que se nos va a informar que los responsables de esto son los municipios, pero en dicha ley el responsable financiero de esos programas es el Estado provincial, y aclaramos: el Estado provincial solamente destina dos millones de pesos anuales para dicho programa. Si, según nos hemos anoticiado, hay 81 comedores –queremos saber cuántos hogares de día y otros planes hay- significa que los mismos reciben 2000 pesos por mes para afrontar la precariedad y el hambre a la que han sometido a nuestros abuelos.

Es por eso que exigimos una pronta respuesta, y si no la tienen el pase a comisión, para que se nos brinde la información que hace un año hemos solicitado. En tal sentido, vamos a presentar una nota para que no pierda estado parlamentario el actual proyecto, pidiendo que se nos informe a quienes hemos hecho el pedido, a nuestros abuelos que necesitan una ayuda inmediata para paliar el hambre y a los trabajadores abandonados también por el Estado. que se encuentran flexibilizados y precarizados, poniendo “el lomo”.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Señor legislador: ¿debo entender que ha pedido la vuelta a comisión?

Sr. Peressini.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión.

Sr. Peressini.- Señor presidente: antes queremos que se nos informe, queremos el debate abierto. Seguramente...

Sr. Presidente (González).- Tengo la obligación de poner en consideración las mociones de orden.

En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 18291/L/16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-13-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 89 del orden del Día, proyecto 20663/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.

Este proyecto de resolución viene a tocar sólo algunos puntos referidos a un tema bastante conocido dentro y fuera de este recinto –lamentablemente conocido-, desde hace muchos años: el Complejo Esperanza -o “desesperanza”, como lo hemos llamado muchas veces.

Hace 5 años empezamos a tratar de visibilizar, desde esta banca, la terrible situación que se vivía en el Complejo Esperanza, que era verdaderamente un depósito de objetos –porque a nadie se le podía ocurrir que el Estado albergaba allí a jóvenes.

Durante los primeros dos años de mi gestión como legisladora intentamos, innumerables veces, traer a este recinto el debate. Recuerdo que algunos legisladores de los que están aquí sentados, con una soberbia casi indescriptible, desmentían una y otra vez las inhumanas realidades que describíamos; inclusive, trayendo fotografías de años atrás, cuando fue inaugurado, desmentían una y otra vez a los legisladores que habíamos ido, caminado y presenciado la situación.

Perdí la cuenta de cuántos pedidos de informes hicimos en aquellos años –junto a los legisladores Birri, Clavijo y Juárez-, pero fueron muchos. Tanto miraba para el otro lado el Gobierno de José Manuel De la Sota y desmentía lo que allí sucedía, que en el año 2014 tomamos la decisión de presentar un habeas corpus colectivo correctivo, al que el juez José González del Solar hizo lugar.

El juez dispuso siete inspecciones oculares y le ordenó al Gobierno de la Provincia un sinnúmero de acciones que debía llevar adelante.

Durante dos años concurrí, personalmente, a cada una de esas inspecciones oculares -no lo hicieron así los funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes a veces iban y otras veces no.

Durante dos años el juez se armó de paciencia, porque el Poder Ejecutivo incumplió, una y otra vez, los plazos que él mismo se fijaba –no los fijaba el juez-; el juez le pedía un plan de obras, el Poder Ejecutivo lo fijaba y lo violaba.

Dos años se tramitó un habeas corpus. Finalmente, en diciembre de 2015 asume una nueva gestión, del mismo signo político, y la SeNAF pasa a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Es cierto –y lo he dicho en otras oportunidades en este recinto- que en pocos meses se advierten algunos cambios, que derivan en que en abril de 2016 el juez González del Solar dé por terminada la acción de habeas corpus.

¿Qué pasó de allí a la fecha en el Complejo Esperanza? Cosas buenas y cosas malas.

Primero voy a hacer un racconto de las cosas que creo que son buenas. Creo que hay una vocación por poner algunas cosas en su lugar.

Coincido y comparto la decisión del Gobierno de la Provincia de Córdoba de modificar el horario en el que trabajan los mal llamados guardias –digo mal llamados guardias porque no tienen un encuadramiento legal que los ponga en esa categoría-, porque es cierto que es imposible pensar que alguien pueda trabajar en instituciones de encierro en un régimen de 24 por 72 horas; eso es inhumano, es insano.

El Síndrome de Burnout existe –y usted lo sabe porque es médico-, esos trabajadores tienen la cabeza quemada porque, además de que trabajan 24 por 72 horas, durante todos los años que han estado allí, los sucesivos gobiernos los han abandonado a su suerte.

No son los trabajadores responsables absolutos de lo que allí pasa, sino el gobierno, porque los dejó a su buena suerte, porque nos les generó espacios psicoprofilácticos de la tarea que les permitan capacitarse, cuidarse -en salud decimos: “quién cuida a los que cuidan”. Nada de esto hizo. Los exprimió, los explotó y los llevó a situaciones por las que hoy muchos de ellos tienen la cabeza quemada.

Por lo tanto, haciendo la salvedad de que comparto y coincido con la decisión, creo que, a la par de esta decisión, debían tomarse algunas otras

decisiones que tienen que ver con un reclamo legítimo de los trabajadores: el encuadramiento específico, porque no pueden seguir siendo considerados administrativos.

No sé si ustedes saben que los trabajadores, por ejemplo, tienen que trasladar a Tribunales, casi todos los días, a jóvenes en conflicto con la ley penal. Muchas veces, en estos traslados los jóvenes desatan situaciones de violencia, a la ida o a la vuelta; muchas más veces a la vuelta, porque cuando vuelven de Tribunales es porque les han dado una mala noticia -que siguen dentro del complejo-; eso genera angustia, bronca, y se descargan con quien tienen enfrente, con estas personas, a las que muchas veces las hieren, las golpean.

Cuando ese trabajador va a la ART, la ART le dice: “no le voy a cubrir esto porque usted es un administrativo, ¿qué hace usted haciendo de seguridad?”. ¿Está claro? Hay una demanda concreta y real, y tienen razón en hacerla.

No sé desde cuándo tienen este encuadramiento –creo que desde 2003. No puede ser que desde 2003 vengán reclamando esto y ningún gobierno de Unión por Córdoba se haya sentado a ponerle una cuota de sensatez a este reclamo.

Obviamente, esto repercute en la situación que se vive dentro del Complejo.

Decía que, de un año a esta parte, cuando uno hace un racconto de los problemas que ha tenido el complejo, puede ver que ha habido, básicamente, una situación de fuga. Pongo entre comillas la situación de fuga –como he dicho públicamente-, porque los pibes que están dentro del complejo no son unas carmelitas descalzas –téngalo por seguro- pero tampoco son el “Chapo” Guzmán, ninguno ha cavado un túnel para irse, todos han salido, en las sucesivas fugas, caminando, porque alguien les abre la puerta. Esto es así, ha sido demostrado en la Justicia que todas las fugas han sido de este tipo.

La mayoría de los conflictos que se dan desde el mes de abril, cuando se levanta el habeas corpus, hasta ahora, ha tenido que ver con la situación interna de los trabajadores. Lo que pasa es que esa situación ha repercutido en la relación con los jóvenes.

Este pedido de informes, puntualmente, tiene tres aspectos centrales respecto a los institutos del Complejo Esperanza. Uno de ellos estaba referido al Instituto Horizonte.

Dentro del Complejo Esperanza, que tiene un predio de 2 hectáreas, hay cinco institutos, siendo Horizonte uno de ellos; en el mes de noviembre del año pasado ese instituto fue cerrado, sin poder obtener ninguna explicación de por qué se cerró. Ni siquiera pudo darla el Secretario de la SeNAF –y por ello traigo el tema a discusión-, el que estuvo acá hace aproximadamente 20 días, así como no pudo responder casi ningún punto de los pedidos de informes.

Quiero dejar sentado, señor presidente, que el Instituto Horizonte, que fuera cerrado en noviembre del año pasado de manera inexplicable, fue reabierto la semana pasada. Y eso ocurrió porque cuando se desató el conflicto que es de público conocimiento –y del que ustedes, como oficialismo, no quisieron hablar la semana pasada-, hubo situaciones que fueron manejadas no sabemos bien de qué manera ya que hay muy poca información al respecto, que derivaron en la reapertura de ese instituto para descomprimir otro de los institutos que abarca el Complejo Esperanza. No estaba tan en orden el

Instituto Horizonte, pero de golpe lo estuvo la semana anterior porque había que meter pibes.

También preguntábamos en este pedido de informes de diciembre del año pasado, si había ingresado personal y, de ser así, bajo qué modalidad, qué tareas cumplía, cómo se lo seleccionó y qué tipo y duración es la capacitación que tuvo. En esto me voy a detener, porque el Secretario de la SeNAF dijo claramente que se iniciaba un proceso de selección e incorporación de nuevo personal de Asistencia y Seguridad, como le ha dado por llamarlos el Gobierno. Indicó, además, como uno de los puntos relevantes de esa convocatoria la participación de las universidades como modo de transparentar la selección. Y, aunque creo que es bueno, paso a contarles que se tomaron de 8 a 10 personas el año pasado –no recuerdo bien- sin ningún tipo de selección, tal vez por la urgencia del caso. No me voy a poner ahora quisquillosa en esto; cuando ustedes han metido más de 60.000 personas en el Estado durante estos últimos 17 años sin ningún tipo de capacitación, selección o concurso, no voy a hacer lío por diez personas. Pero sí voy a estar muy atenta –si es que alguien del oficialismo responde- a este proceso de convocatoria, que primero iba a ser de 30 personas y ahora es de 60 nuevos operadores, que se plantea, además, como toda una epopeya. Pero debo decir, señor presidente, que esta convocatoria adolece del mismo defecto que las anteriores, porque en ningún momento se habla o especifica bajo qué modalidad van a ingresar. Dice que serán operadores de asistencia y seguridad, por lo que se repite el problema. ¿Qué quiere decir cuando se habla de seguridad?, ¿bajo qué escalafón o con qué modalidad van a ser contratados? Vamos a estar en el mismo problema si no encuadramos claramente en el escalafón en el que van a estar.

Segundo punto -lo dije públicamente y también hay un pedido de informes-: me parece espectacularmente bien que las universidades participen en el proceso para darle transparencia. Ahora bien, quien definió y define el perfil de quienes deben ingresar a trabajar allí no son las universidades, porque quien conoce el trabajo que deben hacer quienes están allí no son las universidades, que no tienen injerencia, sino que es la propia SeNAF.

Me pregunto, y se lo pregunté en su momento a los funcionarios, ¿en qué cabeza cabe que no hayan previsto en esta convocatoria que el elemento determinante para ingresar deba ser una correcta valoración psicológica del perfil de quienes van a ingresar?

Ya voy a ir al tema que tengo en expediente, señor presidente. ¿Sabe qué pasa cuando no se han hecho las correctas valoraciones para que ingresen a estos lugares de encierro? Los golpeadores y abusadores abundan. Abundan en el Complejo Esperanza como abundaron en la Casa del Padre Aguilera y el Estado es responsable de esto.

No me vengan a contestar que “pasarán por todos los exámenes que pasan todos los trabajadores: el apto psicofísico”, porque eso es una burla. Necesitamos exámenes especiales y específicos de características de personalidad acordes a la tarea que van a desarrollar. En ningún lado están especificados estos exámenes.

Pero, como si esto fuera poco, en la convocatoria dice que van a ser capacitados, y que la capacitación es parte ineludible del proceso de selección. ¿Saben cuántos días van a capacitar a los que van a ingresar al Complejo Esperanza? Figura 5 días. Si leyera la currícula a cualquiera de los abogados que hay acá –yo no lo soy-, diría que corresponde, por lo menos, a dos años de

la carrera de Abogacía. En 5 días -que, en realidad, son 3, según me informaron los miembros de la universidad que van a estar allí- el Gobierno de Córdoba va a capacitar a 60 personas para que ingresen al Complejo Esperanza.

Lo que quiero poner en discusión es que me parece loable que haya una selección, que traten de dar transparencia, pero creo que por ahí la urgencia tapa lo importante. Si se tomaron el trabajo -y esto lo digo con mucho respeto, inclusive, para el Ministro Angulo, a quien respeto- de hacer todo esto ¿por qué no lo hacen del todo bien? Porque si no empiezan a quedar flancos.

Fíjense una cosa. Somos una de las pocas provincias que tiene una Universidad Provincial que capacita y tiene una carrera terciaria exclusiva de egresados que pueden trabajar en este ámbito.

En esta convocatoria quien tenga este título terciario le va a valer 5 puntos. ¿Sabe cuánto van a valer los 5 días que, además, son obligatorios, por lo tanto no deberían tener puntaje porque si es obligatorio el que no lo hace no entra, no obstante le han puesto puntaje? Los 5 días de capacitación van a valer 40 puntos. ¡Es tan sin sentido lo que están haciendo!

El último punto del pedido de informes hacía referencia a una institución que está fuera del Complejo Esperanza, pero es parte del sistema penal juvenil porque tiene jóvenes, tanto del sistema correccional como del prevencional, que se conoce como Residencia de Medio Camino. Esta sí es una situación grave, más grave todavía que la del complejo. La Residencia de Medio Camino está ubicada en la calle Vélez Sarsfield 5958, la visité en varias oportunidades.

En el mes de octubre de 2014 -lo hago público porque está en la versión taquigráfica porque se lo planteé al Secretario de la SeNAF-, a un grupo de trabajadores del Complejo Esperanza -acá tengo el expediente oficial del Gobierno- les iniciaron sumarios administrativos por malos tratos. Tengo en mis manos la resolución en la que se los deriva para que se les realicen sumarios administrativos y también tengo en mi poder los informes de los profesionales que referían lo que allí había pasado.

El 31 de octubre del año 2016, porque había asumido un compromiso personal con el Ministro -y también con el Secretario de la SeNAF-, le hablé por teléfono y le referí mi preocupación porque existe o existió -lo pongo en pasado- un sistema perverso -y lo voy a denunciar acá porque es el ámbito en el que tengo que decirlo- donde quienes eran separados del Complejo Esperanza por malos tratos eran amparados, cubiertos y traspasados a otras áreas. Usted, señor presidente, me dirá: bueno, los sentaban en un escritorio. ¡No!, señor presidente, no los sentaban en un escritorio, los ponían a trabajar con otros pibes más vulnerables que los del Complejo Esperanza, porque muchos de ellos estaban en el sistema prevencional. Y lo peor del caso es que muchos de esos que amparaban a los golpeadores siguen sentados hoy en escritorios de la SeNAF. Esto me genera una profunda bronca e impotencia, porque no es que no se los dile a los funcionarios, se los dije; no solamente se los dije con la honestidad con la que me había comprometido a decírselos, les mandé un mail -que tengo en mi poder- y les dije: "estoy preocupada por esta situación", está fechado el 31 de octubre.

Cuando estuvo aquí hace poco -20 días- el Secretario Piñero -se levantó Fredy de allí porque estuvo en la reunión-, una y otra vez le pregunté acerca de esa situación porque me habían referido que, después de dos años de esta resolución del Gobierno de iniciar sumarios administrativos a quienes

estaban denunciados por los propios profesionales del Gobierno, resulta que, como por arte de magia, sale una resolución de Fiscalía de Estado diciendo: acá se acabó todo, los muchachos son buenos.

Pero, señor presidente, fíjese el detalle, ¿sabe de cuándo es la resolución? –esto informado oficialmente por el Secretario Piñero en reunión de la Comisión de Derechos Humanos–: del 25 de noviembre del año 2016. Es decir, el 31 de octubre yo, legisladora de la Provincia, de buena fe le manifiesto a un funcionario público mi preocupación sobre la permanencia de personas sospechadas de golpear a pibes, amparadas por funcionarios que deberían estar fuera del Estado, y lejos de sancionarlos, me encuentro con una resolución fechada 15 días después, y habiendo pasado dos años del sumario administrativo, en la que se dice que son buenos muchachos. Y ¡oh, casualidad!, uno de los involucrados es delegado gremial, vinculado a un directivo del gremio. Esto es inadmisible, señor presidente, porque los pibes están en situación de vulnerabilidad total.

Entonces, cuando algún funcionario se enoja porque decimos las cosas públicamente, quiero dejar sentado que antes de hacerlo público lo estoy planteando en este recinto. Y antes de hacerlo aquí lo hice ante quien correspondía y cumplí mi palabra como legisladora de la Provincia de decírselo al funcionario.

Señor presidente: le pido desde este recinto, porque es mi función como representante, que le soliciten a los funcionarios que dejen de apañar no solamente a los guardias que sacaron ahora por mal desempeño, sino a los funcionarios o a los empleados de carrera que trasladan a sus “amigotes” de instituto a instituto para apañarlos. Eso es lo que hay que depurar.

Finalmente, esto deriva en que este desmanejo en el que el Complejo Esperanza, que viene como una crisis estructural, haya explotado recientemente y haya tenido que ingresar el Servicio Penitenciario. Honestamente, aspiro a que el Gobierno encuentre una salida y una solución.

Durante toda la semana pasada guardamos un prudente silencio sobre el conflicto, y cuando me preguntaron dije que estaba de acuerdo con el cambio de horario y que debía tratarse con cuidado. Ahora bien, el conflicto se profundizaba y el viernes de la semana pasada, con algunas dudas sobre la información y la desinformación que había respecto de lo que estaba pasando dentro del Complejo, junto a las legisladoras Caffaratti y Soher El Sukaria tomamos la decisión política de presentar ante la Justicia Penal Juvenil un habeas corpus colectivo correctivo nuevamente. En el día de ayer la Justicia nos comunicó que había dado curso a ese habeas corpus nuevamente y que le había solicitado información al Gobierno de la Provincia, y que la semana próxima iba a realizar una inspección ocular.

En este punto, más allá de la decisión de la Justicia, lo único que quisiera agregar es que sería muy bueno que no tengamos que llegar a presentar un habeas corpus, y sería importante que el Complejo Esperanza, como todos los lugares de encierro, tuviese algún mínimo de control de los tres Poderes del Estado. Eso garantizaría, primero, que ciertas situaciones no queden tapadas y que, si hay alguien ejerciendo mal su función allá adentro, podamos entre todos corregirlo a tiempo. Segundo, también coadyuvaría al Poder Ejecutivo que, desde los otros Poderes del Estado, los que algunas cosas podemos aportar pudiésemos ayudar.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.

Sr. López, J.- Señor presidente: me voy a referir rápidamente a los aspectos más relevantes de este proyecto en tratamiento, no sin antes aclarar que fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales en conjunto con la de Derechos Humanos y Desarrollo Social hace exactamente un mes, el 15 de febrero del presente año, con la visita del Secretario, doctor José Piñero, donde se abordaron todos los temas relativos a la SeNAF, dando lugar a preguntas por parte de los legisladores y de los asesores.

Con total amplitud el doctor Piñero hizo, primeramente, una pormenorizada descripción de cada uno de los programas y acciones que se llevan adelante desde la Secretaría. Con su visita pretendió dar respuesta a un sinnúmero de pedidos de informes que existen sobre la Secretaría, entre ellos el que está en tratamiento.

Señor presidente: el Complejo Esperanza ha sido siempre motivo de mucha exposición mediática, lo hemos comprobado la semana pasada porque lo que allí sucede siempre tiene una repercusión, una trascendencia especial, de la cual este Gobierno no se desentiende, todo lo contrario, se ocupa y lo hace llevando adelante políticas públicas serias de Minoridad donde prima, fundamentalmente, el interés legítimo de los niños, las niñas y los adolescentes, sin desviarse en intereses particulares.

Cada vez que los medios de prensa reflejan problemáticas ...

Sr. Presidente (González).- El legislador Peressini le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. López, J.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: el legislador está manifestando que el Gobierno está garantizando la integridad de los niños.

La semana pasada hemos visitado el Complejo, y si el Gobierno garantiza los derechos de quienes se encuentran allí alojados producto de distintas intervenciones, ¿por qué los niños se encontraban golpeados y con lesiones de balas de goma producto de la violenta intervención represiva de los guardia cárceles en el establecimiento del Complejo Esperanza?

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.

Sr. López, J.- Señor presidente: voy a continuar con el tratamiento del proyecto en consideración.

Estos conflictos que vienen sucediendo en el Complejo Esperanza en los últimos tiempos tienen una clara explicación: el cambio de régimen horario de los empleados, que hasta hace poco tenían la modalidad de 24 por 72, por un régimen de 12 por 36, que es recomendable y aconsejado por casi todos los organismos internacionales y nacionales en materia de trabajo; esto ha generado resistencia en aquellos que creen que sus intereses o privilegios pueden estar por encima de los niños y adolescentes. Esta resistencia se

incrementó en los últimos días al conocerse la noticia de que se está realizando una nueva selección de personal, concretamente de guardias, y tiene la particularidad –como hacía referencia la legisladora Montero- que por primera vez esta selección va a estar determinada por una comisión integrada por distintas universidades: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Universidad Provincial y el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, dependiente del Poder Judicial; y esta vez no será la SeNAF la encargada de seleccionar el personal sino solamente de poner el soporte y hacer la convocatoria, pero va a ser esta comisión la que va a garantizar las condiciones para las nuevas incorporaciones, en una selección de la cual no participará el Poder Ejecutivo por primera vez en la historia, en donde habrá cursos de capacitación que van a ir mucho más allá de cuestiones de seguridad y que alcanzarán materias como Pedagogía Social y otras.

Asimismo, se inició un proceso de capacitación -veo que aburre a algunos escuchar esto, pero de estos temas trata el pedido de informes, y algunos legisladores preopinantes han hablado de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el pedido de informes en tratamiento- que alcanzó a 191 personas, en el cual participaron el Poder Judicial y algunas ONG junto a juristas reconocidos del país.

Por eso, señor presidente, no es casualidad que se haya generado el conflicto que tomó estado público la semana pasada. Todo cambio crea resistencia y en un lugar tan sensible como el Complejo Esperanza cualquier hecho conlleva repercusiones mediáticas.

El doctor Piñero nos manifestaba en su visita del 15 de febrero que el Complejo Esperanza cuenta con una gran cantidad de personal, no sólo los guardias a los que hemos hecho referencia, sino también personal administrativo, socioeducadores, psicólogos, trabajadores sociales. En el caso de los socioeducadores, son más de 50 los que atienden a los chicos de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Desde la Secretaría se están trazando actualmente los ejes centrales a fin de incorporar nuevos socioeducadores para que también los fines de semana y los feriados puedan atender en esos horarios a los jóvenes.

Desde la SeNAF están convencidos de que la ayuda en el proceso socioeducativo y el acompañamiento a los internos en el complejo es un factor fundamental. Como podemos advertir, la política en materia de personal es ir logrando la profesionalización del mismo. Hoy hay más de 260 profesionales a cargo del Complejo Esperanza, pero cada conflicto, repito, viene precedido de algún cambio, y son cambios que se vienen dando en defensa de un interés supremo de protección de los niños, pero también tienen que asegurar y respetar los derechos de los trabajadores, como fue el caso de la modificación del régimen horario.

También se está avanzando fuertemente en mejorar las condiciones del Complejo Esperanza, cuestión que ha sido reconocida hasta por legisladores de la oposición, que asimismo manifestaron que es bueno el trabajo que se viene llevando adelante.

De la misma manera, se está trabajando en un proyecto socioeducativo para que los chicos puedan adquirir valores para vivir en sociedad, es decir, puedan respetar pautas sociales, que sabemos que es muy fácil decirlo, pero muy difícil de alcanzar. En verdad, lo ideal sería que no existiera el Complejo

Esperanza; los chicos que están en el complejo son hijos de la exclusión, somos responsables todos, como Estado, como gobierno y como sociedad, que lamentablemente haya chicos que tengan que terminar en lugares como el Complejo Esperanza.

La legisladora Montero, en el pedido de informes en tratamiento, se refirió a la cantidad de personal en la Residencia de Medio Camino que se encuentra bajo sumario administrativo. El doctor Piñero fue claro en su visita, se lo explicó, se declaró respetuoso del trabajo que tiene que llevar adelante una oficina de investigación administrativa que depende de la Fiscalía de Estado y que escapa a la órbita de la Secretaría de la que forma parte, pero a las personas sumariadas se les dictó la falta de mérito.

En definitiva, es un tema que ha sido ampliamente debatido en este recinto. Pero quiero repetir una cosa que también dijo el doctor Piñero en su visita cuando algunos legisladores de la oposición lo atacaban, textualmente dijo: “muchas veces los gobiernos ven fantasmas en la oposición y los opositores ven que el gobierno no se interesa por resolver positivamente ninguna de las cuestiones que se plantean”. Y cuando se ataca tanto al gobierno de Unión por Córdoba sobre el tratamiento de los niños y adolescentes, él les recordó que fue este gobierno de Unión por Córdoba el que terminó con los chicos muertos en los precintos policiales y por eso se creó lugares acordes para el tratamiento; que hace falta mejorar el trabajo y la atención, seguro, por eso todas y cada una de estas acciones y programas, pero tenemos que recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no pareciera que las cosas siempre han nacido en el año 2000 y antes vivíamos en una panacea.

Por eso pido el cierre del debate y el archivo del proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo el proyecto 20663/L/16, formulada por el legislador Julián López.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-14-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 117 del Orden del Día, proyecto 18365/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: este es un proyecto menos traumático que el anterior, pero no menos importante, ya que afecta recursos, porque todo lo que se hace mal afecta recursos de los cordobeses. Previamente, estuve conversando con el presidente de la Comisión de Deportes y él tiene respuesta respecto a este proyecto, y eso está bueno.

Quiero decir que este proyecto va a cumplir en los próximos días un año; fue presentado el 30 de marzo de 2016, o el 28 de marzo del 2016, y fue a raíz de la situación que se vivió con motivo del partido que debía jugar la Selección Argentina de Fútbol en el Estadio Mario Kempes, y el escándalo que se desató a partir del calamitoso estado en el que se encontraba.

A partir de allí, hicimos el pedido de informes, y enhorabuena que hoy tenga respuesta. Pero fíjese que, en función de aquella situación, distintos informes han llegado a nuestro conocimiento y, básicamente, nos empezamos a preguntar, porque el hecho de la existencia de las agencias del Estado hacen que no tengamos control efectivo sobre las acciones que las agencias llevan a cabo, como cuáles son los contratos que celebran, cuál es la plata que les ingresa, en qué la gastan, cómo la gastan, etcétera, tanto es así que, por ejemplo, mirando el Presupuesto 2017, allí se dice que para reparación y no sé qué más del Estadio Mario Alberto Kempes se iban a destinar para la obra un total de 72.765.000 pesos; que vienen de ejercicios anteriores 56.213.000 pesos, y que este año se van a gastar 16 millones. Pero como las rendiciones, en el marco de las agencias, son tan oscuras, cuando uno va a la Cuenta de Ejecución Presupuestaria y quiere saber en qué se ejecutó el presupuesto de la agencia, brilla por su ausencia; lo que sabemos es: “aportes por la Agencia Córdoba Deportes, tanto”, es lo único que figura. En la Cuenta de Ejecución, el último informe que tenemos es de septiembre de 2016.

Por lo tanto, el pedido de informes se refería -un legislador amigo que tiene bastante experiencia en el tema del Mario Kempes me refería- a cómo había sido el deterioro. Todos marcan -no sé si esto es así, el que sepa seguramente me podrá decir- que hubo un hecho que fue la utilización del Kempes en un famoso rally, creo que era Mansur el que estaba a cargo en aquel momento, en donde los autos entraron al campo de juego y fue un espectáculo fantástico para el que lo miraba, terrible para el estadio. Eso fue hace 13 o 14 años, no sé bien cuántos.

De allí en más, todos los que han hablado conmigo coinciden en que nunca se hicieron, aparentemente, las inversiones que se debían hacer y se fueron poniendo parches.

En el medio de todos estos años nunca hubo una decisión clara acerca de para qué usamos el estadio y cuál es la definición, en términos políticos, de para qué lo usamos, cómo lo autorizamos y cuánto nos pagan los privados que hacen uso de las instalaciones.

Un informe que sacó “Mundo D” en diciembre del año pasado, que nos da más información que la que nos brinda la Agencia Córdoba Deportes, dice que ese año se hicieron cuatro recitales, la fiesta del Día del Niño, la fiesta de Cadena 3 y 45 partidos de fútbol, no es poca la actividad, y refiere que el Mario Kempes es el más usado del país en todo el 2016.

Son nueve preguntas -que estoy segura que el legislador Campana va a responder- y, en verdad, entendemos que estamos frente a una nueva gestión

de la Agencia Córdoba Deportes, porque la que se fue dejaba bastante que desear, aunque sigue siendo miembro del directorio quien era su presidente, que realmente decía cosas desopilantes; decía que todo estaba bien y cuando llegaban los jugadores a la cancha algunos se lesionaban por el estado del campo de juego –no lo digo yo, lo dijeron los jugadores. Mientras, el presidente de la Agencia afirmaba que estaba todo fantástico, mientras tampoco podía explicar claramente, por ejemplo, quién usufructúa o usufructuaba los carteles, el estacionamiento, las publicidades, todo era un gran agujero negro en el Kempes, no un agujero verde ya que de verde tenía poco porque el pasto estaba destruido.

En definitiva, estamos ansiosos por tener respuesta porque es mucho dinero: 16 millones de pesos. Y, si el estadio es el más usado, es importante saber cuánto de ese dinero que nos costará a los cordobeses será aportado por quienes hacen uso de él –y en algunos casos abuso-, porque los espectáculos musicales que se han hecho en el Kempes, algunos de ellos convengamos que la han “levantado en pala” y, además, están exentos de la mayoría de los impuestos -porque esta Provincia les ha facilitado todo-, ¿cuánto han pagado para remediar el Estadio Kempes?

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: a raíz de esta cuestión -que justo cae cuando hace un año que está en el Orden del Día el pedido de la legisladora Montero-, da la casualidad que un año después estamos discutiendo exactamente lo mismo.

Hemos presentado desde este bloque sendos pedidos de informes y hemos requerido la presencia de quien hoy es el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria, para que nos explique personalmente y de manera detallada algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó, pero también con lo que va a pasar, porque toda esta remediación que se está haciendo sobre el campo de juego del Estadio Kempes la están pagando todos los cordobeses, y me parece que si la política continuará siendo exactamente la misma que se ha venido desarrollando durante estos últimos diez años, nos terminará saliendo bastante caro mantener un estadio de fútbol.

Lo digo porque, aparentemente, el problema que hoy tiene el campo de juego del Kempes está relacionado con el mal uso que se hizo, en su momento, cuando a alguien se le ocurrió que ahí se podía hacer una pista de rally -y durante varios años fue escenario del Mundial de Rally-, y quienes asistíamos asiduamente a ver partidos de fútbol, en muchas oportunidades veíamos desde las tribunas que se observaba todavía el trazado para aquellos campeonatos que se corrían en el Kempes, como una manera de atraer gente, pero también destruyendo el objeto fundamental que tiene el estadio, que es la práctica deportiva del fútbol, básicamente entendiendo que los equipos más grandes de la ciudad de Córdoba tienen estadios con capacidades limitadas para la cantidad de gente que los van a ver, con lo cual se hace imprescindible contar con este estadio.

Brevemente, hago referencia a que han tenido desde el Gobierno de Córdoba una suerte enorme, deberían agradecer y levantar una estatua a Sergio Marchi y a los futbolistas que decidieron hacer un paro -este problema

que tuvo más de un mes y medio al fútbol parado-, si no esto sería ya un escándalo de trascendencia nacional e internacional. Lo digo en estos términos porque el fútbol genera eso: trascendencia nacional e internacional, porque si el campeonato hubiese empezado el 4 de febrero, hubiésemos estado dos meses con los dos equipos principales de Córdoba sin poder jugar en el Estadio Kempes.

En verdad, este domingo vamos a tener un problema bastante significativo en la Ciudad; ayer, la AFA comunicó que el partido de Belgrano con Racing de Avellaneda se va a jugar el día domingo en un estadio a confirmar; en el único estadio que se nos ocurre que se puede jugar es en el de Instituto, que tiene capacidad total para 23 mil personas, y Belgrano, solamente, en calidad de socios, tiene 25 mil, con lo cual ahí tenemos el problema que ni siquiera podrán ir los socios. Ojalá –apelo a la buena voluntad del público futbolero cordobés- que no se arme ninguna situación desagradable de la que el lunes se tenga que estar cronicando por la irresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno de la Provincia al no haber hecho lo que tenían que hacer, no solamente hace diez años -cuando se decidieron hacer estas cosas- sino cuando encararon este proceso que no sabían que podía durar esta cantidad de tiempo. Y siguen diciéndonos ahora que, probablemente, el 26 de marzo se pueda jugar; después que se juegue el 26 de marzo quiero ver el 27 cómo queda el estadio.

Pero lo que me parece importante es que el Gobierno de Córdoba –siendo un estadio manejado por el Gobierno, ya que la Agencia Córdoba Deportes tiene su manejo exclusivo- decida cuál es la política que tendrá de acá para el futuro respecto de lo que se haga dentro del estadio. Eso tiene que ser un polo deportivo y debe ser prioridad absoluta la práctica deportiva de todo lo que se ha generado en ese lugar, como también del uso del estadio por los equipos de fútbol que llevan miles y miles de personas cada fin de semana a ese lugar.

Entonces, si van a querer seguir haciendo negocios con privados –en realidad, los negocios lo hacen los privados, el Estado simplemente les da las garantías y las condiciones poniendo un estadio en el que entran casi 60 mil personas al servicio de algún empresario para que haga un show multimillonario y se lleve muchísimo dinero, y esta semana que estamos hablando tanto de estas cuestiones, de los shows, de los espectáculos públicos, de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de quienes manejan- sería bueno que para el Estadio Kempes se haga un protocolo para su utilización, se respete y, fundamentalmente, se les evite a los cordobeses que cada vez que alguien quiera hacer un negocio y utilice al Estado, que use a la Provincia de Córdoba como artífice de ese negocio, lo tengamos que terminar pagando entre todos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

Con franqueza, creo que lo que más le preocupa a la oposición es el grado de improvisación que hay en ciertos y determinados hechos fundamentales para la vida de la Provincia que está haciendo el Gobierno de Unión por Córdoba.

Creo que el Gobernador, aunque parezca muy simple, tiene que saber a ciencia cierta quiénes son los responsables de las áreas pertinentes, a los fines de determinar si hubo inacción por parte de los mismos para terminar los trabajos y, en caso afirmativo, se proceda, total y absolutamente, a la sanción de quienes cometieron este error.

¿Por qué digo “imprevisión”? En el fútbol nacional venía solucionado, tras una larga negociación -que, si usted me pregunta mi opinión personal, no coincido en cómo terminó-, el comienzo del Torneo Nacional, y a pesar de los días de más que tuvo la Provincia de Córdoba para alistar el césped de la cancha –repito, el césped de la cancha-, se encuentra sin disponibilidad.

Eso obliga a los clubes cordobeses a buscar un nuevo estadio o a postergar la fecha –esto iba a ser el 26-, y se pierden todas las garantías en este tipo de eventos, como es la seguridad y todo lo referente al desarrollo del evento futbolístico, que produce una gran movilización de gente y que hoy no sabés por qué camino van a tener que andar. Y eso, señor presidente, sí preocupa a la oposición.

Ha habido improvisación en EPEC, lo digo porque va a tomar estado público que hay otro “muñeco al suelo”: el presidente de EPEC; creo que es un ex dirigente “K” y ya está volviendo a su provincia natal; creo que ha habido imprevisión en esta famosa ley que está pretendiendo imponer el oficialismo en el tema del desmonte, que produjo inundaciones terribles en la Provincia de Córdoba. Hay improvisación en la obra pública –el Camino del Cuadrado, por dar un ejemplo-; improvisación en el ajuste al PAICor. Pero, el colmo de los colmos es la improvisación para plantar el césped, señor presidente, es el colmo de los colmos.

Mire, otro grado de imprevisión que ha tomado el territorio provincial –sé que no les está gustando a los señores legisladores del oficialismo- es no haber tenido la visión de ir regularizando el conflicto en la educación. ¿Cómo no se van a dar cuenta que van a tener conflictos con los maestros, cuando están ganando 12.000 pesos por mes?, escuchen esto: está por debajo del nivel de la pobreza un maestro en la Provincia de Córdoba. ¿No tomaron la previsión de decir: “vamos a tener problemas”?

Entonces, ese grado de imprevisión, señor presidente, es lo que preocupa a la oposición.

El tema del fútbol es una pasión popular, pasión que tienen todos. Pero el grado de improvisación que están teniendo en hechos neurálgicos para la Provincia de Córdoba es una preocupación que deben tener todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.

Con esto ¿qué quiero decir, señor presidente?, que adelanto el voto afirmativo para el proyecto en tratamiento.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: mientras hablaba el legislador Nicolás, revisé, justamente, un portal de noticias, y voy a aprovechar la presencia del bloque del oficialismo para solicitarle, por su intermedio, señor presidente, que por favor le transmita al señor Gobernador que le atienda el teléfono al señor Armando Pérez, que es presidente del Club Atlético Belgrano, que se está quejando de que hace varios días está queriendo hablar con él y no puede.

Creo que sería importante que usted transmita ese mensaje.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Campana.

Sr. Campana.- Señor presidente: en verdad, el tema viene variado, de un pedido de informe se han generado tres o cuatro, pero hay respuestas para todos.

Comenzando por la legisladora Monteros, tengo que pedir disculpas porque la información ya estaba disponible desde hace bastante tiempo, pero por algún error no había podido llegar a esta Legislatura. Espero que sea de su satisfacción.

La pregunta número uno, que se refiere a cuáles son los instrumentos legales y administrativos que determinan el uso posible del Estadio Kempes, le debo informar que son variados, ya que pueden ser comodatos, concesiones o alquiler.

La otra pregunta hace referencia a qué eventos se realizan, o quienes definen qué eventos se realizan: es el Directorio de la Agencia Córdoba Deportes; cuáles son los alcances de estos espectáculos: obviamente, tienen que ver el monto del alquiler que se cobra por el estadio, dependiendo de la envergadura o el objetivo a cumplir; puede ser deportivo, con participación de equipos de fútbol en diferentes torneos, equipos de rugby -que también han jugado partidos en el Kempes-; si tiene valor artístico, turístico o cultural; para definir el monto se toman en cuenta todos esos parámetros.

Aquí me quiero detener un poco porque hay algo que es importante tener en cuenta cuando se realizan estos tipos de eventos deportivos, y es que la cantidad de gente que se mueve a la provincia está de acuerdo a la envergadura del mismo. Por ejemplo, al recital de Paul McCartney vino gran cantidad de gente no sólo de otras provincias sino además del exterior.

Otra de las preguntas está referida al detalle de los montos que ingresaron a la Agencia Córdoba Deportes por estos alquileres. Nos han informado que en los cuatro espectáculos más grandes que se hicieron, que fueron Iron Maiden, Maná, La Renga y Paul McCartney, los ingresos fueron de 2.750.000 pesos.

A muchos les parecerá que no es un monto acorde con lo que puede costar o no el estadio, pero me quiero detener en algo importante. Cuando se hizo la remodelación para la Copa América, quien es hoy el Ministro de Comunicaciones, estando en campaña para Gobernador en esa época, nos había criticado fuertemente por el dinero que invirtió el Estado en la remodelación del Kempes. Dicha obra permitió no solamente albergar la Copa América, sino que, posteriormente, se realizaran espectáculos muy importantes a nivel futbolístico, como eliminatorias o el amistoso Argentina-Brasil, lo cual generó un gran movimiento económico.

Puedo decir con certeza, porque en esa época yo coordinaba el área, respecto del movimiento económico que generaba un espectáculo de este tamaño, que gastamos entre 115 y 120 millones de pesos en la remodelación del Kempes, y en el movimiento económico -que no sólo usufructúa la provincia, sino también los ciudadanos de la Provincia de Córdoba- se generaron 250 o 260 millones de pesos, y en un estadio que en esa época todo el mundo destacaba como uno de los mejores de la Argentina para utilizarlo por varios años más.

En el caso concreto de los alquileres para espectáculos, según la información que nos brindó la Agencia Córdoba turismo por los relevamientos que se hacen en la época de turismo, el gasto que realizaron las personas que visitaron nuestra ciudad –en alojamiento, comida, compras y otros-, en la temporada 2015-2016, estimativamente fue de 1408 pesos por persona y por día, con alojamiento en hotel.

Suponiendo que cuando vino Paul McCartney nos visitaron 20 mil personas de otras provincias –es probable que ese número de personas haya pernoctado en nuestra ciudad y aprovechado, inclusive, para tomarse unas mini vacaciones, por la fecha en la que se hizo el espectáculo-, hubo un ingreso extra, a lo que cobraba la Provincia por alquiler, de aproximadamente 28 millones de pesos por día.

Escuché a la legisladora decir que se hacía la concesión, a los espectáculos, de no pagar impuestos. Obviamente, esos espectáculos generan ingresos por otros sectores: hoteles, restaurantes, shopping –y esto sin hablar del transporte. Cuando uno analiza la viabilidad o no de conceder o alquilar el estadio para realizar estos eventos tiene en cuenta todo esto.

A la legisladora también le preocupa el destino de los fondos. Obviamente, van a la Agencia Córdoba Deportes, ítem Ingresos Propios, Cuenta Financiamiento Operativo.

Recién mencionaron el monto global para mantenimiento que figura en el Presupuesto para la Agencia. Hay que tener en cuenta que la Agencia Córdoba no sólo mantiene el Estadio Mario Alberto Kempes, cuyas instalaciones son muy grandes –hay una pileta de natación, una pista de atletismo, una cancha de hockey, un circuito ciclistico-; el mantenimiento del parque del Kempes también está bajo la órbita de la Agencia Córdoba Deportes.

Obviamente, es un monto muy importante, no se lo puede discriminar por ítem, como pide la legisladora, porque se hace con personal propio; algunas obras se hacen por licitación.

En esto, quiero desmitificar –porque conozco bien el tema- que la Agencia Córdoba Deportes –y todas las agencias- son un agujero negro, algo oscuro. La Agencia Córdoba Deportes tiene su presupuesto, tiene el control del Tribunal de Cuentas, sus procedimientos administrativos; por eso, creo que es un mito que sigue quedando y que muchos repiten; pero tengan bien claro que todos los años se hacen los balances y se informa, más allá del control que tienen.

Escuché la preocupación que tienen los legisladores por cómo se cuida el estadio. Les voy a leer algunas cláusulas que se incluyen en los contratos que realiza usualmente la Agencia Córdoba Deportes para la concesión del estadio -ojalá otros hicieran lo mismo, porque en algunos lugares se va a tener que hacer cargo el Estado.

En los contratos para todos los espectáculos que se hacen en el Mario Alberto Kempes, artísticos o deportivos, se incluye esta cláusula: “La Empresa podrá, como consecuencia del presente ...” -perdón, no traje los lentes y los años pasan para todos, por suerte tengo brazos largos (risas)- “utilizar la zona circundante a la Cancha Principal, debiendo ubicar el escenario en el espacio comprendido entre la tribuna denominada ‘Ardiles’ (ex cubierta) y los límites del inicio de la pista de atletismo. Les está expresamente prohibido el uso de estructuras sobre la Cancha Principal”. Sólo se autoriza –obviamente- una

estructura donde va el equipo de iluminación y se manejan las consolas de sonido, con no más de 9 pies de apoyo. Quiero hacer una aclaración: que la gente pise la cancha no afecta el césped, lo que lo afecta es la colocación de grandes estructuras por muchos días.

“La Empresa se compromete, para protección del piso y césped de la Cancha Principal, en toda su superficie, a la cobertura a través de cobertor especial fenólico, todo conforme Anexo que se adjunta y que forma parte de la presente. Así también, se compromete a la no utilización de productos químicos o de artefactos que pudieran contenerlo sobre la superficie de la cancha y hasta un radio de veinte metros alrededor de la misma.

La Empresa asume única y exclusivamente la responsabilidad por los daños ...

Sr. Presidente (González).- Legislador: discúlpeme.

El legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Campana.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Adelante, legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

Yo hablé de imprevisión, y quiero que me conteste por qué no está el pasto en la cancha del Kempes. Por todas las cláusulas que está leyendo debe ser un buen contrato, pero lo que pregunto es por qué no está el pasto para que empiece el campeonato de fútbol.

Sr. Presidente (González).- Calma legislador, ya llega. (Risas).

Continúe, legislador Campana.

Sr. Campana.- Si el legislador me interrumpe no puedo llegar a ese momento. Lo que pasa es que son muchas preguntas y estoy tratando de contestar todas. Ya le voy a contestar.

-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Campana.- “Debiendo reparar los mismos en un plazo no superior a los diez días de producido o descubierto el daño efectivo. Para el caso de incumplimiento del mismo podrá la Agencia reclamar la reparación y un punitivo equivalente al diez por ciento del monto total de entradas”.

Hay otra cláusula –que no voy a leer porque el legislador Nicolás está apurado- por la que quien alquila el estadio firma un pagaré en garantía por reparaciones por 150 mil pesos, ejecutables por parte de la Agencia Córdoba Deportes.

La legisladora Montero también tenía la duda sobre cómo se concesiona o quién explota el estacionamiento del estadio Kempes. Cuando el estadio es concesionado, las playas de estacionamiento son parte del contrato, por lo cual el servicio es prestado por el concesionario, con excepción de la playa sur que, por convenio, usufructúa la Liga Cordobesa de Fútbol para obras de beneficencias a clubes que las necesitan.

A los montos que se cobran los establece siempre la Agencia Córdoba Deportes, a principio de año, para que no haya distintos precios. Si hay alguna persona que cobra un monto diferente no es responsabilidad de la Agencia; la Agencia comunica el monto muy bien y están los controles correspondientes, pero eso puede pasar.

Creo haber contestado medianamente las preguntas, si no después lo charlaremos con la legisladora Montero.

-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Campana.- ¡Ya va, le estoy respondiendo a la legisladora Montero!

Sr. Presidente (González).- No dialogue, legislador Campana. Diríjase a la Presidencia, que la Presidencia lo pone en caja al legislador Nicolás. (Risas).

Sr. Campana.- Con respecto al último punto del pedido de informes de la legisladora Montero, sobre si existe un plan a futuro que tenga como objetivo compatibilizar los usos deportivos y artísticos, siempre estuvo contemplado que la prioridad en el Mario Alberto Kempes es el tema deportivo, sobre todo el fútbol; pero hay que contar un poco de historia.

En algún momento fue el Club Atlético Talleres el que jugaba siempre de local en el Kempes, pero en algún momento se mudaron.

El Club Atlético Belgrano usó el Kempes en algunos momentos, porque en su cancha había mucha presión para los jugadores –sobre todo en algunos torneos en los que no les iba muy bien-; cuando llegó a primera ya usaba su estadio.

Entonces, uno estaba en la disyuntiva de si lo iban a usar o no, hasta que se tomó la decisión de facilitar las cosas para que sea de uso permanente.

Los legisladores Nicolás y Quinteros también están preocupados por la seguridad de los espectadores. Entendemos que, ante eventos multitudinarios, sobre todo los de Talleres, era necesaria la utilización del Mario Alberto Kempes. Hoy, por suerte, se está utilizando con continuidad.

Cuando hablaban de si se invirtió o no, del famoso rally. Obviamente, hubo un error hace muchos años, cuando se realizó el primer evento en el Estadio Kempes. En ese momento, la pista de rally se hizo sobre el césped, y eso generó una mancha que se veía más cuando el pasto no estaba en buenas condiciones; pero eso no quiere decir que el campo de juego estuviera en malas condiciones.

Obviamente, estéticamente no estaba bien, pero todos recordarán que en la época de la Copa América no hubo ninguna queja con respecto al campo de juego.

Después se decidió una intervención integral.

Con respecto a si existe un plan integral, le digo que sí. La decisión siempre fue que se dedicara al deporte y, eventualmente, cuando no haya ningún tipo de compromiso y con las condiciones que pone la Agencia. Salvo algunas excepciones -que fueron errores-, se va a cuidar que la actividad principal sea el deporte. No podemos dejar de lado que grandes espectáculos también generan ingresos importantes no solamente para la Provincia sino

para la comunidad de Córdoba, por lo que se tendrán en cuenta, pero siempre fuera de las fechas donde haya deportes; esa es la decisión que se ha tomado.

El legislador Quinteros fue el segundo que formuló preguntas, pero si me deja -por su intermedio le pregunto, señor presidente- le voy a contestar primero al legislador Nicolás.

Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.

Sr. Campana.- Por diversas situaciones que se vivieron el año pasado, se decidió hacer una intervención integral de la cancha, lo que no significó solamente cambiar el pasto o “hacer brotar el pastito”, como dijera el legislador Nicolás, sino que también se hizo un gran trabajo para colocar el riego por aspersión que antes se hacía de forma manual, así como movimientos de suelos, y luego la intervención en el estadio propiamente dicho. Acá no se está hablando de una ruta, por ejemplo, en la que se puede saber más o menos de manera cierta cuándo se empieza a pavimentar y cuándo se termina para poder utilizarla; acá estamos hablando de la naturaleza y de muchos trabajos que se vieron demorados por la lluvia. Uno tiende a pensar que con el agua el pasto comenzará a crecer más, pero en este caso la lluvia fue perjudicial ya que había que hacer una serie de trabajos, como fertilizaciones y rolado, por ejemplo, que se hacen con máquinas, pero si el piso no está en condiciones de firmeza adecuada, se dejan marcas y desniveles que son perjudiciales, por lo que se tiene que esperar a que la tierra se seque para poder seguir con esas intervenciones en el suelo.

La buena noticia, al menos para nosotros, es que la Agencia Córdoba Deportes ha comunicado que a partir del 26 de marzo estará disponible el estadio para ser usado por los equipos cordobeses. Lamentamos que la gente de Belgrano no pudiera reprogramar el partido, como sí pudo la gente de Talleres, así el perjuicio hubiera sido menor. Pero, como bien dijo el legislador, con lo que no pasó para qué vamos a especular. Esta es la realidad; el fútbol va a volver al Mario Alberto Kempes el 26 de marzo.

Ahora, respecto a varias declaraciones del legislador Quinteros, en las que hablaba de responsabilidad, de negocios, de espectáculos, con todo respeto le contesto por su intermedio, señor presidente, que la actividad de la Agencia Córdoba Deportes no es hacer negocios; si viene un privado a hacer su negocio, es lógico que así sea, pero suena mal hablar de “negocio” de la Agencia, porque ha quedado demostrado con los datos que di que ese negocio es, a la larga, de la comunidad cordobesa a través de los miles de ingresos que genera el estadio más allá de su actividad propiamente dicha.

Estas cláusulas son importantes, más teniendo en cuenta lo que sucedió estos últimos días. De haber tenido cláusulas tan claras en otros lugares del país, y me refiero por ejemplo a lo que debe ser una concesión o cómo tiene que participar un Estado en los espectáculos masivos, se hubieran evitado muchos problemas como los que tiene ahora la gente de Cambiemos con el intendente de Olavarría a la cabeza.

La gente de la Agencia Córdoba Deportes deslinda toda la responsabilidad civil, siendo asumida obviamente por la empresa que realiza el espectáculo; esto es algo de cajón, pero que no ocurre en otros lugares. No me voy a poner a leer todas las cláusulas, pero voy a pedir que se incorporen al

Diario de Sesiones por si los legisladores quieren consultarlas. Pero es bueno que tengan en claro que la Agencia Córdoba Deportes toma las precauciones necesarias para que los inconvenientes que pueda tener un privado que usufructúa las instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes no tengan ninguna consecuencia para el Gobierno de la Provincia de Córdoba y, por ende, para los vecinos.

Creo haber contestado las preguntas del pedido de informes de la legisladora Montero, aunque si necesita algún otro dato lo podemos charlar después, por lo que pido el cierre del debate y el archivo del proyecto.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo del proyecto 18365/L/16, formulada por el legislador Campana.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se envía a archivo.

-15-

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 123 del Orden del Día, proyecto 20923/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: este es un tema que a los vecinos de la zona sur de la Ciudad de Córdoba nos preocupa, y nos llamó poderosamente la atención cuando este año se puso de nuevo sobre la mesa.

Estamos hablando del CPC 12, que pertenece a barrio Jardín. Es una construcción ubicada en la esquina de Richieri y Celso Barrios del mismo barrio.

En el año 2012, apenas asumido su tercer mandato, el entonces Gobernador De la Sota hizo un recorrido con el entonces también, novel Intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, y anunció que allí se construiría un CPC que iba a tener la particularidad que iba a ser gestionado conjuntamente entre reparticiones públicas provinciales y municipales. Esa era la diferencia que iba a tener con los otros 11 Centros de Participación Comunal que están diseminados en la Ciudad de Córdoba.

Solamente basta pararse en esa esquina para darse cuenta de la real importancia que tenía la ejecución de esta obra, porque iba a solucionar muchos aspectos de la vida cotidiana de 130 mil habitantes.

Para el que no conoce la zona, el mismo está ubicado pasando 50 metros del Easy de Av. O'Higgins. Si usted se para allí y quiere ir a un CPC tiene dos opciones: va al de barrio Empalme, o va al de Villa El Libertador ubicado en Av. Armada Argentina pasando Circunvalación. Es decir, la persona que no tiene vehículo propio tiene que tomar dos colectivos, uno que lo lleva al centro y otro al CPC, por lo tanto, realizar un trámite, por más sencillo que sea, le va a llevar a cualquier ciudadano una mañana entera de pérdida de tiempo en traslado, más el tiempo que insume el trámite en sí.

Por tal motivo, fue un anuncio que los vecinos de la zona sur vimos con bastante beneplácito porque nos parecía que era muy importante, independientemente de que, por supuesto, fiel a su estilo, el ex Gobernador De la Sota hizo una parafernalia comunicacional, desproporcionada para lo que era la obra, y vaya a saber cuántos miles de pesos se gastaron en la propaganda de algo que en el año 2017 todavía no está.

Esto fue noticia en los primeros días del mes de enero porque a este legislador que habla lo llamaron vecinos de esa zona diciendo que se estaban robando las aberturas del CPC. De eso pudo dar fe Canal 8, que fue, filmó y emitió las imágenes de cómo un particular en su camioneta se llevaba aberturas; quiero aclarar que no eran aberturas que estaban en depósito, sino que iban con una barreta, las sacaban y se las llevaban.

Con mucho calor, el 4 o 5 de enero –no recuerdo exactamente el día– acudí al lugar, fui, me bajé y empecé a mirar. Por supuesto, el pasto estaba alto, en un estado de abandono total, tomé algunas imágenes, las subimos a las redes y se hizo eco la prensa.

Ahí pasó algo mucho más insólito que el estado mismo de abandono después de tanto tiempo: recordemos que a raíz de una nota periodística realizada 2 años antes que decía cuáles eran las obras inconclusas en la Ciudad de Córdoba, el Gobierno salió a decir que para fines de 2014 esa obra iba a estar terminada, y estamos en marzo de 2017, y hace una semana fui, hablé con los vecinos y me dijeron que la Policía pasa un rato y se va, los yuyos son de 2 metros de alto, es decir el abandono es total.

Pero hay algunos datos que, me parece, ameritan la solicitud de que el Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales concurra a esta Legislatura para dar explicaciones. Porque a raíz de poner en conocimiento este hecho de abandono y desidia total de este edificio, apareció la empresa constructora que había sido contratada para la obra, ECOPSA. Ellos mismos reconocen que la obra era la recuperación de un edificio existente para el funcionamiento del Centro de Participación Comunal barrio Ampliación Jardín de esta Ciudad...

Señor presidente, le pido, si es tan amable, silencio en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Por favor, ruego silencio en el recinto.

Continúa en el uso de la palabra legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Muchas veces puede resultarles incómodo este tipo de pedido de informes, pero no es a mí a quien le tienen que contestar, sino que hay muchos vecinos muy preocupados por el tema que merecen una respuesta y, básicamente, el respeto en el tratamiento de este proyecto.

¿Por qué solicitamos la presencia del Ministro García? Porque es la máxima autoridad del área que tiene a su cargo la ejecución de la obra, con la continuidad de este Gobierno de Unión por Córdoba.

La gente de ECOPSA sostiene que esa obra estaba terminada casi en un 90 por ciento, le faltaba muy poco, con lo cual, en verdad, no entendemos por qué el 9 de diciembre del año 2015, a sólo un día de abandonar el Gobierno, el ex Gobernador De la Sota rescindió este contrato con la empresa. Seguramente, el legislador Manuel Calvo nos va a poder explicar porque, si mal no recuerdo –yo la tuve en mis manos–, la rescisión de ese contrato está refrendada por el ahora legislador que, en ese momento, estaba como ministro a cargo del área. Probablemente nos pueda explicar porque debe conocer esta obra que se inició con un presupuesto de 17 millones de pesos, se fue a 22 millones y no sabemos cuál es el costo hasta el momento ni cuál es el costo –y nos gustaría conocerlo– que va a tener, en definitiva.

Pero, más que eso, nos interesa mucho saber, después de tantos días de abandono, por qué se le rescindió el contrato a una empresa y si existen los juicios en la vía contencioso administrativa que está planteando el contador Ferrero, quien está a cargo de la empresa ECOPSA. Porque ellos sostienen que tuvieron que hacer abandono de la obra porque hubo más de 6 meses de certificaciones de obra que no les pagaron, la deuda se hizo absolutamente imposible de asumir, la empresa no tenía “espalda” para –según lo que informa la empresa constructora– continuar solventando esta obra y la tuvieron que abandonar. Y no solamente la tuvieron que abandonar, sino que la propia empresa se tuvo que presentar en convocatoria de acreedores porque el daño ocasionado por la falta de pago de la Provincia la había llevado a esa situación. De ser así, seguramente eso se va a resolver.

Creo que, inclusive, están accionando judicialmente esa rescisión del contrato, por lo que queremos que también nos informen sobre el estado de esa causa judicial, y por eso era el pedido de la presencia del Ministro.

Pero también queremos saber cuál es la decisión política del superior Gobierno de la Provincia de Córdoba –que hoy está a cargo del contador Juan Schiaretto– porque, según tenemos entendido –y lo podríamos citar a comisión si hubiésemos tenido este proyecto tratado en ese ámbito–, quien está a cargo de la empresa sostiene que cuando se hace cargo el actual Gobernador del manejo del Ejecutivo provincial, acude a hablar con los funcionarios del área y textualmente le dicen que esta es una obra que no tiene prioridad para este Gobierno, que no la iban a tener en cuenta y que no se iba a ejecutar. No queremos entrar en la cuestión de los rumores, simplemente es una información que está vertida por el propio titular de la empresa.

En verdad, nos parece que es importante que salga esta resolución favorable por parte de esta Legislatura, y quienes tienen a su cargo el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales concurra a esta Legislatura a dar todas estas explicaciones y las que, seguramente, de acá en adelante podrán ir surgiendo.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en relación a esto deseo expresar dos cuestiones, básicamente, porque también participe en el tema y soy vecina de la zona.

Una, es la necesidad de la zona en relación a este CPC que, en su momento, cuando se pensó, obviamente se lo hizo en función de que era necesario.

Pero, en verdad, ahora se le suman otros elementos, y a esto varios legisladores que también son de esa zona lo pueden certificar. Esto se ha constituido –hoy que la Provincia hace mucha publicidad en relación a los temas de los corredores seguros y demás– en una esquina muy peligrosa en términos de una obra absolutamente abandonada, sin ningún tipo de control, con los yuyos muy altos y con mucho tránsito de peatones porque se encuentra al frente de grandes superficies comerciales.

Entonces, además de la cuestión puntual que el legislador Quinteros está pidiendo en relación a la obra, cuya información es importante tener porque nadie entiende bien por qué se paró y qué ocurrió, por lo que es bueno que sea un legislador quien firmó la rescisión del contrato, sería importante –y por esto pedí la palabra- que le transmitieran al Gobierno de la Provincia que no se puede anunciar una obra con bombos y platillos, empezarla y dejar abandonados a su suerte a muchos vecinos que cada día se enfrentan a un peligro inminente. ¿Qué van a esperar, que pase algo en esa esquina por la inseguridad? La edificación, tal como está, es una verdadera boca de lobo.

En consecuencia, apoyo la moción de que venga el funcionario que corresponda y que hagan lo que tienen que hacer que es terminar la obra.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Scarlatto.

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: escuchamos atentamente los planteos expuestos por los señores legisladores y quiero aclarar que, efectivamente, el Gobierno de la Provincia en su momento debió tomar la decisión de rescindir el contrato porque la empresa constructora a cargo de las tareas no cumplía con los plazos, con el proyecto y la ejecución correspondiente de la obra.

El Gobierno de la Provincia pagaba en tiempo y forma. No es cierto que se le haya estado adeudando, lo que argumentan como el motivo del incumplimiento. Así queda demostrado en los procedimientos administrativos, en los controles, en las notificaciones, en los registros fotográficos y en todos y cada uno de los procedimientos que el área de Arquitectura fue llevando adelante para insistir en los cumplimientos de esta obra.

La obra de referencia alcanzó un avance de construcción del 87,02 por ciento. Sin embargo, por los incumplimientos por parte de la empresa se tuvo que tomar la determinación de decretar la rescisión del contrato. Naturalmente, desde ese momento la empresa hace sus recursos de revisión que va interponiendo, lo que ha ido demorando la toma de posesión de esta obra por parte del Gobierno provincial, siguiendo en poder y en custodia de la empresa, a pesar de la paralización de los trabajos.

Con respecto a la faz económica de si puede haber o no deuda con la empresa, se encuentra todo lo obrado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba para lo que sea la liquidación pendiente que pueda haber; por otro lado, también se deben determinar –y está en ese proceso

investigativo- las responsabilidades por los daños ocasionados por esta empresa por sus incumplimientos. Eso va a determinar los montos a pagar o a cobrar que el Estado tiene.

Recién se preguntaba sobre cifras o montos. Efectivamente, el legislador Quinteros hizo referencia a que una obra, que en su momento tuvo un presupuesto oficial de 16 millones 830 mil pesos, cuando se firma el contrato y se empieza con la ejecución pasan de 9 a 10 meses, por lo que el monto tuvo el ajuste correspondiente, llegando a 21 millones de pesos. Posteriormente, con todas las determinaciones de precios y con todos los avances, lo invertido alcanzó los 26 millones 900 mil pesos a junio de 2015, momento en que se paralizó la obra unilateralmente por parte de la empresa por los incumplimientos que tenía.

En ese sentido, una vez determinado todo lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas, el área técnica legal del Ministerio va a ejecutar, por supuesto, todo lo que corresponde a las garantías de caución que tiene que cobrar el Estado por el incumplimiento de la empresa, esto va a dar por finalizada esa etapa.

De modo paralelo, está listo en el área de Arquitectura el trabajo y el proyecto para la presupuestación correspondiente del 13 por ciento restante, porque el compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba es terminar con esta obra aplicando –una vez puesto y tenido el presupuesto oficial definitivo- el mecanismo de contratación que prevé la Ley Administrativa provincial para completar y cumplir ese compromiso con los vecinos de la ciudad para que esta obra se pueda ejecutar, por lo cual el Estado, más que pagar a esta empresa que dice el señor legislador que está queriendo cobrar y no ha cobrado, va a percibir fondos cuando se balancee lo que es el monto inicial de obra, con el incumplimiento de lo no terminado, las penalizaciones por los daños sufridos por el abandono de la obra, por lo que ha pasado allí, más lo que signifique cobrar el fondo de garantía que se tiene que celebrar en cada contratación de una obra de estas características, que se va a tener que hacer cargo la empresa aseguradora de pagarle al Estado provincial teniendo, sin duda, un saldo económico favorable.

Pero hoy lo que más nos preocupa es que ya está pronta la terminación de los proyectos técnicos y la puesta en marcha de las obras correspondientes para culminar con ese 13 por ciento que queda para que se culmine y finalice.

En todo lo que han significado estas demoras tienen una responsabilidad las reconsideraciones que ha ido haciendo la empresa sin hacerse cargo de controlar y cuidar el patrimonio y hoy el Ministerio de Obras Públicas está haciéndose cargo de esta situación.

Señor presidente: después de dar información, de haber respondido a los puntos que tienen que ver con este pedido, de dar la información de los montos que requería el legislador en su petición, de explicar que no hay deuda por parte del Estado provincial, de explicar la situación procesal que tiene este caso, de dar las garantías de que el Estado provincial va a culminar esta obra, es que solicito el archivo del proyecto.

–Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente,
legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el archivo de expediente 20923/L/16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-16-

Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 124 del Orden del Día, proyecto 18302/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

Tiene la palabra el legislador Saillen

Sr. Saillen.- Señor presidente: quiero referirme a este pedido de informes que ya cumplió un año desde que lo presentamos y todavía seguimos esperando respuesta para la gente de barrio Oncativo que, para quienes no lo saben, está ubicado en Río Cuarto, a cuatrocientos metros del Centro Cívico y está tapado o pareciera que no existe, porque este asentamiento tiene más de 20 años y el Gobierno de la Provincia, a cargo de Unión por Córdoba hace 17 años, todavía no le ha dado una solución fehaciente a esta gente,

Entendemos, además, que no es solamente facultad de la Provincia sino también del Municipio, y las anteriores gestiones tampoco han solucionado los problemas de la gente.

En ese sentido, señor presidente, puedo decir que son aproximadamente 250 familias las que viven en este barrio, que está ubicado sobre la línea de ribera, y la otra mitad está asentada en un predio privado, y nos llama la atención principalmente puesto que ese predio privado era de un ex funcionario. Seguramente, el legislador Rins, al que no veo desde hace varias sesiones, lo conocerá mejor ya que pertenecía a la gestión pasada.

Es una realidad el hecho de que los habitantes del barrio han recibido notificaciones de desalojo. La gestión anterior y la actual avalaron esa posibilidad y nosotros entendíamos que el Gobierno de la Provincia y el

municipal debían tomar cartas en el asunto y darles respuestas a estos ciudadanos que todavía no las han tenido.

En nuestro pedido de informes, fundamentalmente, requeríamos que nos respondieran sobre si existía un estudio socioeconómico que se hubiera realizado o si la Provincia tenía la facultad y la iniciativa de darle una solución a la reubicación de estas familias, entendiendo que están en una situación de riesgo porque por la línea de ribera pasa el cauce de un río -y los legisladores oriundos de esa ciudad no me van a dejar mentir- y en cada lluvia o catástrofe climática ocurre algún accidente, por lo cual son varias las familias que han sufrido inundaciones o han tenido problemas de salud porque no pueden ingresar las ambulancias ni el servicio público.

En ese sentido, nosotros pedimos una rápida respuesta y entendemos que la Provincia no debe hacer vista ciega a esta problemática, que ya hemos planteado respecto de varios barrios de esta Provincia con cuestiones similares, respecto de los planes Promev, barrios Pueyrredón, IPV Argüello, y también hemos conversado con algunos legisladores respecto de algunas iniciativas que se deben implementar porque hay problemas bastante graves y no se les ha dado solución.

Solicitamos a los legisladores que consideren este pedido de informes, nos acompañen en su aprobación y rápidamente se dé una solución, porque no queremos que pase a mayores ya que este cauce del río se está comiendo parte de las viviendas y hay muchísimos niños que viven en ese lugar.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador José Luis Scarlatto.

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: he escuchado atentamente la posición del legislador autor del proyecto, y en vista de la oportunidad que tengo por la tarea legislativa, en este caso, representando al Departamento Tercero Arriba, puedo decir cuál ha sido el comportamiento durante estos años de los gobiernos de Unión por Córdoba frente a situaciones complejas, en la línea de buscar la reubicación o solución habitacional para los vecinos. Y claro que estos temas son preocupantes y duelen mucho.

Sinceramente, creo que estamos en una etapa con una expectativa muy importante. Río Cuarto tiene un intendente comprometido con la gestión y he observado fehacientemente, porque he podido hablar con Juan Manuel Llamosas, que viene acompañado de una política muy sólida y activa en este breve tiempo de gobierno en materia de vivienda, marcando una clara diferencia con respecto a otros períodos, que prometían muchas viviendas en la ciudad y que, a la hora de los números, no fueron muchas.

Llamosas, en ese sentido, viene avanzando de manera muy sólida y contundente, con un trabajo firme y decidido. Y nosotros, desde el gobierno de Unión por Córdoba, hemos demostrado, a lo largo y ancho de la Provincia, el compromiso de ir buscando soluciones en todo, colaborando con los gobiernos municipales para que estos temas vayan teniendo una solución.

Es por eso que confío plenamente, señor presidente, que este tema que plantea el legislador es importante seguirlo bajo el concepto, la premisa y la convicción del trabajo mancomunado que va a llevar adelante nuestro gobierno, como lo hace con todas las intendencias de la Provincia de Córdoba, y con el compromiso firme que lleva adelante, de la misma manera que lo ha

demostrado en este breve período de tiempo, con la asistencia directa, con la acción solidaria, llegando con respuestas sociales a este sector que está con estas dificultades –como manifestaba el legislador preopinante- y, por lo tanto, solicito la vuelta a comisión del proyecto para seguir trabajando desde la comisión, y en el convencimiento de que el Gobernador Schiaretti, junto a nuestro Intendente Llamosas, van a encontrar progresivamente la respuesta y la solución a este tema.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 18302/L/16 propuesta por el legislador Scarlatto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

El proyecto vuelve a comisión.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-17-

Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 144 del Orden del Día, proyecto 21023/L/17.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: hace varias semanas que se reúne una comisión para discutir la llamada “Ley de Bosques” y el otro día se trató de discutir la Ley de Reforestación, pero, en realidad, esto es imposible si primero no discutimos la Ley de Bosques. Al margen de esto, en todas las reuniones, en todas las intervenciones periodísticas y en todos lados aparece el problema de que necesitamos el mapa. El punto es que el mapa existe, hay varias versiones, pero existe.

El 21 de diciembre, cuando se planteó la moción de que se le diera preferencia al proyecto 21880, de Ley de Bosques, para que se le diera tratamiento ese mismo día, varios legisladores, presidentes de bloque –en nuestro caso y creo que otros bloques no fueron invitados- fueron a la Casa de Gobierno y se les mostró un mapa; era lógico porque cuando vino el Secretario de Ambiente y nos explicó cómo se constituía el mapa, la famosa “herramienta”, él nos dijo con toda claridad que ellos habían trabajado junto con la comisión que se reunía en el Ministerio y junto a los autores del proyecto para darle consistencia al mapa, no era una herramienta, y el mapa existía. Quizás algún legislador que estuvo presente en ese momento después quiere hablar para que corrobore si es así o no, porque el mapa estaba, y tiene una importancia enorme porque refleja el verdadero espíritu de la ley, que quiere decir lo siguiente: ¿pueden decirnos cuántas hectáreas de las 1.900.000 que hoy están en rojo, de acuerdo al mapa que salió de ese proyecto de ley, siguen estando en rojo?, porque esa es la clave de todo el problema de lo que tenemos que discutir.

Pedimos el mapa y lo negaron, pero sabemos que el mapa está de nuevo porque, según los diarios, al Ministro Bergman le dieron uno, hace veinte días; en uno eran 8 capas, después se pasó a 16, en el medio hubo uno de 12; hay otro mapa, ya tenemos dos mapas: el que le dieron a Bergman y el que le mostraron a los legisladores el 21 de diciembre, y creo que hay otra versión más, porque cuando se hablan de capas, se dice 8, 12 o 16, ¡es el festival de las capas!

Hay otros mapas -dos por lo menos-, entonces, ¿por qué no le dan el mapa a esta Legislatura? Porque sin mapa no se puede discutir y a esto lo reconocen absolutamente todos, porque el objetivo del debate del punto del ordenamiento del Bosque Nativo es que haya un nuevo mapa. Muchos pedimos una nueva ley porque la anterior no es correcta, no defiende el bosque.

Estos días salió un informe que emerge de los propios datos oficiales: el desmonte sigue y sigue, y sigue en la zona que acá se dice que se quiere proteger, que es la del norte, en la cual hay un especial interés porque, lógicamente, es el único lugar donde queda bosque. Y si están tan preocupados por una zona donde queda bosque y lo quieren disminuir, queremos saber cuántas hectáreas -ya que la inmensa mayoría de las protegidas están en el noroeste- son las que van a quedar o no.

El planteo es concreto y no podemos discutir si no sabemos cómo son las cosas, y “la verdad de la milanesa” está en el mapa, ese es el punto.

Entonces, traigo acá el planteo -que conste que no lo hago como moción todavía- porque quiero que toda la Cámara apruebe este proyecto para que venga el mapa con la fuerza de un pedido de esta Cámara. Porque calculo que el mapa no lo tienen acá para contestarme con el mapa, si lo tienen me tapan la boca y empezaremos a discutirlo, bienvenido; pero no creo que lo tengan porque vienen diciendo que no. Lo que pretendo, por lo menos, es que toda la Cámara apoye el reclamo de que nos den el mapa -o las dos versiones del mapa-, porque si luego de una decidieron pasar a otra versión porque fueron evolucionando, ¡bárbaro!, dennos las dos, vemos la última, pero hay que discutir en concreto.

Y el tema es serio. Los otros días nos quisieron hacer discutir una reforestación, y no se puede discutir ninguna reforestación porque tiene que

tener como base qué es lo que vamos a cuidar de bosque, etcétera. Se plantea que se pongan especies exóticas, hay que discutir primero el ordenamiento territorial del Bosque Nativo, o sea el mapa, y luego discutimos dónde y cómo reforestamos. Discutir el proyecto de reforestación sin discutir el mapa es una maniobra, porque le quieren hacer creer a la población que estamos defendiendo el bosque porque van a plantar algo que en el proyecto dice con toda claridad -ver el proyecto- que es una operación comercial para la industria maderera; si es eso, que se reúna la Comisión de Industria y se discuta la industria maderera, pero no mezclemos con que esto tiene que ver con el bosque.

Resultado: queremos el mapa; si la Cámara en conjunto apoya este reclamo vamos a tener la posibilidad de tener el mapa. Luego haré la moción respectiva.

Gracias, señor presidente.

—Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente, porque somos coautores de este proyecto, quiero plantear ante esta Cámara -y quizás también pueda salir de este ámbito este debate- que creo que es válido que sigamos discutiendo y planteando las posiciones que tiene cada uno frente a la sociedad, sobre todas las cosas frente a una sociedad organizada, que hace poco se manifestó – muchos de los que estuvimos aquí participamos- en una marcha que, sin duda, ante las políticas de Estado, está planteando la necesidad de una respuesta, pero en función de lo que establece y pide la ley. No es capricho de una sociedad cuando reivindica y reclama sus derechos.

Desde el año pasado, desde el primer pedido de informes que hicimos en junio, hemos planteado que la discusión que se estaba dando, en el marco de la Secretaría de Gobernación, carecía del cumplimiento de las pautas de participación establecidas en el COFEMA y también del estándar exigido por la Ley 26.331.

Esto lo hemos repetido muchísimas veces en comisión, pero también lo vamos a hacer aquí en sesión, porque tenemos la oportunidad de hacerlo en esta ocasión que se debate, y se lo hace en un marco en el cual superamos aquel problema de que había un plazo en diciembre para aprobar la ley sí o sí, que el Gobernador dijo en la apertura de sesiones que no iba a haber ley sino hay consenso; que la sociedad cordobesa, a través de una manifestación multitudinaria, con expresiones artísticas y también con la expresión y la definición política de determinados sectores –como ambientalistas o productores- está planteando que quiere un proceso verdaderamente participativo.

Como bloque, nosotros hemos planteado, desde la primera oportunidad, que debía ser el ámbito de la autoridad de aplicación quien lleve adelante este proceso de validación; esto quiere decir que se debe validar el anterior ordenamiento territorial de la Ley de Bosques, de la Ley 9814, que está vencido. Lo aclaro porque seguir avanzando con un nuevo ordenamiento jurídico es cambiar las reglas de juego para validar.

Entonces, nosotros y la sociedad somos conscientes de que necesitamos un nuevo ordenamiento territorial; debemos actualizarlo teniendo en cuenta todo lo que hizo como política de Estado desde 2008 a esta parte, incluido el mapa vectorial que desapareció.

Frente a la posibilidad de encontrar una salida, ratificamos nuestra posición como bloque de que la responsabilidad de validar y actualizar el mapa de ordenamiento territorial de la Ley de Bosques la tiene la Secretaría de Ambiente de la Provincia, quien hasta el día de hoy viene llevando la tarea por la competencia propia de los planes anuales de manejo y conservación de bosques nativos.

Por lo tanto, el mapa que en algún momento se mostró en el ámbito del Poder Ejecutivo no aparecerá, evidentemente –Eduardo-, en el ámbito del Poder Legislativo, por una razón lógica: no puede aparecer un mapa sin que antes se apruebe la ley que se quiere aprobar, porque si hoy aparece un mapa tiene que ser en función de la Ley 9814. Por ello, no aparecerá ningún mapa hasta que no se apruebe esta ley.

Somos absolutamente conscientes de esa situación, porque si aparece un mapa no puede hacerlo en función de una ley que no se aprobó; tiene que aparecer un mapa y tenemos que empezar a trabajar en función de ese mapa, con errores o no, que es aquel que se estableció en la Ley 9814, y después podemos hacer ensayos con el nuevo mecanismo que plantea el oficialismo y la Secretaría. Hemos dicho en muchas oportunidades que el avance de la tecnología nos permite tener mejores resultados al momento de valorar las capas, que empezaron a ser 8 y 12, y que sabemos que tienen que ser 16 o más. Y, en ese sentido, creo que hubo una apertura por parte del Poder Ejecutivo, cuando el Secretario de Ambiente habló con nosotros para decirnos que propongamos todas las capas que queramos.

Pero, insistimos, al momento de tener las capas alguien tiene que tomar la decisión de cómo se van a categorizar esas capas, quién las va a categorizar, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, previo un proceso participativo.

Nosotros no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano y dijimos: queremos un verdadero proceso participativo; queremos que no se viole el principio de no regresividad, y queremos que se aumente el presupuesto nacional y que la Secretaría de Ambiente de la Provincia cada vez tenga más presupuesto para que el servicio ambiental sea verdadero.

Hace poco hemos discutido la posibilidad de dar respuesta a pequeños productores que han sido engañados y que piensan que con una ley de bosques van a resolver el problema económico. Pero no es la Ley de Bosques la que lo hará, sino que será otra herramienta legislativa, como puede ser una ley de agricultura familiar.

También sabemos, como nos pasó en la reunión de comisión pasada, que se puede dislocar el tratamiento de Ley de Bosques, por un lado, porque eventualmente está la posibilidad de salir al territorio y, por otro lado, la nueva ley, en la cual muchos estamos de acuerdo con aumentar la cobertura vegetal en Córdoba, pero no con exóticos, porque ahí entraríamos a otro problema.

Entonces, creo que esta Cámara tiene la oportunidad de tener una discusión en comisión sincera y verdadera, en la medida de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo asuma su responsabilidad prevista por ley, que es convocar a la sociedad cordobesa a diseñar un verdadero proceso participativo

que esté acorde con las pautas participativas que establece el COFEMA en la Resolución 236 y también los protocolos de la Nación.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.

Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.

En realidad, hoy estamos esperando que el Poder Ejecutivo convoque a un nuevo proceso que sea verdaderamente participativo para la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo.

El proceso impulsado por la Provincia carece de legitimidad, no respeta preceptos básicos y centrales que establece la normativa nacional, como ya lo hemos manifestado en varias oportunidades.

La discusión, señor presidente, se ha tornado casi abstracta debido a que hasta la fecha no se ha presentado en público la versión cartográfica, nada más ni nada menos que el mapa, la esencia misma de cualquier iniciativa de ordenamiento territorial; sin la confección y análisis de mapas confiables y legitimados por todos los actores implicados es inválido.

El tratamiento del proyecto de Ley de Bosques avanzó tan vertiginosamente que solicitar los mapas hasta parece extemporáneo. Digo esto porque el proceso está viciado desde sus orígenes. El Poder Ejecutivo, en todo este tiempo, no ha logrado construir el consenso necesario para poder avanzar en un proceso superador.

Hemos demostrado voluntad sincera y trabajo abocado para abordar seriamente esta cuestión, despojados de intencionalidades políticas. No sé si el oficialismo puede expresar lo mismo. Sin embargo, creemos que el proceso está caduco y que es responsabilidad del Gobierno volver sobre sus pasos y encarar una nueva etapa.

Señor presidente: iniciemos un nuevo proceso participativo, que en esta oportunidad la Provincia respete y garantice los presupuestos mínimos de la Ley 26.331, que se incluya la participación de absolutamente todos los actores, sin condicionantes de plazo, y generando en todos los niveles de la sociedad una interacción.

Córdoba debe actualizar su ordenamiento territorial de bosque nativo, y para ello se torna imprescindible respetar la legislación nacional vigente y los métodos para garantizar la participación ciudadana.

Señor presidente: tenemos al alcance de la mano una guía del análisis de actores sociales, una guía de metodologías, una guía de difusión, y una para la documentación del proceso participativo y el ordenamiento territorial de bosques nativos, material aportado el 15 de noviembre de 2016 por el Área de Participación Social de la Dirección de Bosques de la Nación a las unidades ejecutoras responsables de la implementación del proceso participativo.

Estamos perdiendo la oportunidad histórica, señor presidente, para sentar un precedente en las próximas actualizaciones que tiene la Provincia por delante.

Todos los actores involucrados, en especial los que tenemos la responsabilidad de gobierno, debemos estar a la altura de las circunstancias y hacernos responsables de la protección de nuestro bosque nativo para nosotros y para la posteridad.

Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: a pesar de coincidir con los legisladores preopinantes, estamos obligados a hacer uso de la palabra porque es una muy buena oportunidad para que la posición de cada uno quede asentada en la versión taquigráfica, ya que hemos insistido en reiteradas oportunidades para que las reuniones de comisión puedan tener versión taquigráfica pero no lo hemos logrado.

En principio, me voy a referir al tema del mapa. Bien dijeron los legisladores preopinantes que hubo una propuesta presentada por el Secretario de Ambiente en distintas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de verlo por primera vez el 21 de diciembre cuando nos llevaron al “Panal”, y la intención era aprobarlo el 28 de dicho mes. Ese día, el Secretario de Ambiente y el Secretario de Agricultura nos dijeron que habían diseñado una “Ferrari” para que nosotros manejáramos –hablando de esta herramienta- y nos hablaron de ocho capas.

Esta herramienta habla de un sistema satelital que, sin duda, es muy bueno y también hace referencia al establecimiento de capas. Para darle contenido a ese píxel, a ese cuadrado de 30 por 30, también puede ser muy bueno que cada uno de los actores que dice la ley nacional participe de la elaboración de las capas -si seguimos hablando de las ocho capas de la “Ferrari”. La herramienta es muy buena si, mediante la participación de los actores claves que establece la Resolución 236 del COFEMA, se valoran esas capas para que después interactivamente nos puedan dar un mapa.

Cuando vinieron los funcionarios del interbloque de Cambiemos, nos hablaron de once capas. La Ley de Presupuestos Mínimos habla de 16 capas; entiéndase que 16 es el presupuesto mínimo, y como bien decía el legislador Fresneda se pueden ampliar, y ahora encontramos en los diarios lo que creo que es el primer mapa con un viso de oficialidad, en función de este mapa de 16 capas que salió en los medios la semana pasada que la Secretaría de Ambiente le presentó al Ministerio de Ambiente de la Nación para ser validado.

Algunos confiamos en que el Ministerio de Ambiente de la Nación va a hacer las observaciones que oportunamente hizo el Director de Bosques Nativos del Ministerio, marcando las irregularidades que nosotros planteamos en Córdoba, y entendemos que este mapa va a volver para someterlo al proceso participativo que necesariamente tiene que existir para que tenga la validez necesaria.

Hoy tenemos una ley vigente en la provincia, y algunos legisladores tenemos el temor de que este tema, en función de no lograr los consensos necesarios, salga de la agenda política de Córdoba, porque hay muchos legisladores que pensamos que hay que rever esta ley del año 2010 y hacer una ley más acorde a lo que establece la ley nacional.

Tenemos el mapa, por un lado, el proyecto por el otro y la problemática.

Se habló en esta Legislatura, y específicamente lo planteó el Gobernador en su discurso de apertura de sesiones, de consenso legislativo y de que la representación del pueblo de Córdoba está sentada en esta Cámara.

Tuve la oportunidad de escuchar al Ministro Bergman, cuando estuvo en la Casa de Gobierno presentando los dos nuevos parques nacionales,

mencionar el consenso necesario que establece la ley nacional. Después, el Gobernador habló nuevamente de consenso legislativo –que creo que son dos cosas distintas.

Creo que esta es una ley en la que tenemos que adecuarnos a un marco nacional. Quienes entendemos que las leyes no se interpretan, sino que se cumplen, estamos atrapados en este proceso participativo indispensable.

Desde el 21 de diciembre hasta hoy hemos avanzado sustancialmente. Con mucho agrado escuché decir al legislador Presas, en la última reunión de comisión, que estaban dispuestos a abrir este proceso participativo, acorde a la ley nacional y a la Resolución 236 de COFEMA. Pero eso no alcanza.

Es cierto lo que dijo el Gobernador sobre que la representación política de Córdoba está sentada en esta Legislatura, y los que estamos sentados acá, seguramente, hemos sido votados por muchas de las 20 mil personas que se movilizaron criticando lo que hemos hecho hasta ahora.

Termino con dos exhortaciones. La primera exhortación sería: convoquemos a este proceso participativo que los cordobeses anhelan y exigen y que los legisladores estamos obligados a acompañar, para lograr una ley que llegue a esta Legislatura cerrada porque cuenta con el consenso de todos los actores sociales y temáticos, y que los legisladores simplemente tengamos que levantar la mano para aprobarla -sin debate legislativo porque surgió del consenso social, tal cual lo establece la ley.

Esta es la primera exhortación a la mayoría de la Provincia. No podemos dejar de decir que en la situación en la que nos encontramos es responsabilidad de este Gobierno de Unión por Córdoba, que gobierna desde hace 17 años y fue oficialismo durante todo este proceso que empezó en 2007.

La primera exhortación es, entonces, que el oficialismo abra el juego a este proceso participativo para que logremos, de una vez por todas, esta ley que nos exigen los cordobeses.

La otra exhortación es que si no están dispuestos a lograr este consenso no sigamos gastando plata de los contribuyentes en debates, en viajes, en comisiones, porque seguramente –y me atrevo a hablar en nombre de toda la oposición- sólo van a contar con los 40 votos de la mayoría. Si es así, levanten la mano ya, voten este proyecto y paguen los costos políticos que tienen que pagar.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.

Hoy es la primera vez que esta Legislatura, en sesión, puede discutir uno de los problemas más candentes de la Provincia de Córdoba, desde que algunos legisladores del oficialismo –junto con algunos de la oposición- presentaron, a fines de diciembre, el proyecto de ley de ordenamiento del bosque nativo con la intención de modificar la ley que actualmente rige el ordenamiento de nuestro bosque nativo.

La intención del Gobierno fue cambiar la ley y montarse en una exigencia real, que es la necesidad de actualizar los mapas de cobertura de nuestro bosque nativo, para avanzar en la modificación de la ley que regula las actividades y las definiciones generales sobre nuestro bosque nativo.

El proyecto de ley que está vigente en esta Legislatura fue armado por los ministros, por los funcionarios, por los empresarios del campo, por los especuladores inmobiliarios. Luego, los legisladores firmantes lo trajeron a este recinto e intentaron aprobarlo rápidamente.

Pero, ante la alerta de ese nuevo avance saqueador del Gobierno, miles de personas nos movilizamos a fines de diciembre e imposibilitamos que el Gobierno acelere el proceso de consenso que mencionó el Gobernador en la apertura de sesiones.

Esas personas ratificaron las exigencias, el pasado 1º de marzo, con una movilización de más de 20 mil personas que venían desde distintos lugares del interior de nuestra Provincia y confluyeron en la ciudad de Córdoba. La exigencia fundamental a este Gobierno es que se dé un proceso participativo para discutir el mapa, la ley y cualquier modificación de las leyes referidas a las problemáticas ambientales que el Gobierno impulse. Esa es la exigencia fundamental de la movilización que, efectivamente, ha penetrado en esta Legislatura.

Claramente, el Gobierno presentó un proyecto de ley sin mapa de ordenamiento territorial porque, si presentaran el mapa, tendrían que blanquear el saqueo y el desastre ambiental que han llevado adelante desde 2010 a la fecha. Tendrían que blanquear los desmontes legales y los ilegales, los desmontes autorizados, pero sumamente cuestionados, los desmontes ilegales que generaron infracciones -los dueños de los campos siguen sin pagarle al Estado. Tendrían que mostrar los incendios.

Además, tendrían que mostrar sus verdaderas intenciones, porque no se animan a mostrarlas gráficamente en un mapa, pero sí a escribirlas en un proyecto de ley.

En el proyecto de ley sacan, claramente, la prohibición del desmonte como una infracción, permiten la intervención de la silvicultura con plantas megatérmicas y la utilización del rolo, no prohíben el desmonte químico -prácticas que actualmente avalan, sistemáticamente, los que hoy manejan la Secretaría de Ambiente, los que hoy gobiernan-; esas son las prácticas que han llevado a la destrucción de nuestro ambiente.

Las generaciones presentes y futuras pagamos eso con inundaciones, con sequías, con servicios ambientales destruidos por el avance de los grandes capitalistas del campo; vemos destruidas las cuencas de nuestras sierras chicas, donde miles de personas ven deteriorados su ambiente y su hábitat.

Los campos del sur se encuentran inundados. Después de la catástrofe va el Estado a tratar de subsidiar y resolver parcialmente los problemas, cuando son los principales generadores de esos problemas.

Pero no sólo se reclamó un proceso participativo. Otro reclamo fundamental de esa movilización es que este Gobierno, y el bloque mayoritario, mande al archivo el proyecto de ley que está vigente. Eso debe quedar sumamente claro porque si no están vendiendo humo.

Los legisladores dicen que es un proceso viciado, que está caduco, no solamente por lo metodológico -porque nunca escucharon a los verdaderos interesados en defender el ambiente y el bosque nativo- sino también por el contenido político devastador, saqueador del proyecto de ley vigente.

Por eso, las organizaciones que nos movilizamos vamos a sostener que no existe proceso participativo en el tratamiento de la ley de ordenamiento

territorial del bosque nativo ni en la elaboración de los mapas si el Gobierno y la mayoría no mandan al archivo el proyecto vigente.

Queremos un proceso participativo no para que se escuche a las organizaciones, como hicieron con la fantochada de las reuniones de comisiones a fin de año, donde todo el mundo vino a exponer que es un desastre ambiental lo que están impulsando, que es la continuación de la política que desde hace muchísimos años vienen llevando adelante, que hace falta un cambio; donde se dieron argumentos técnicos, científicos y políticos de sobra para que archiven el proyecto saqueador, porque atrás del proyecto legislativo vienen los intereses políticos. Llamamos al conjunto de la oposición a no entrar en las maniobras de la participación porque con esas maniobras ya modificaron el ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos Aires, reconocido por el respectivo Ministerio de la Nación y en los procesos participativos de Bergman referidos al saqueo y entrega a los especuladores inmobiliarios en toda la provincia de Buenos Aires, y lo mismo quieren hacer aquí.

No podemos confiar en el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es el que le retiró las exenciones impositivas a la megaminería, el que avanza sin parar sobre Vaca Muerta, el que hace oídos sordos a la destrucción del medio ambiente en la provincia de San Juan para validar a la Barrick Gold, es decir, a la megaminería contaminante. Ellos son socios del saqueo, y es por eso que hay una claridad política desde el Frente de Izquierda desde la que exigimos el archivo del proyecto y que se genere un proceso participativo en donde las organizaciones de base no solamente sean escuchadas, sino que sean los elementos fundamentales de elaboración del proyecto. Y esa experiencia ya la tenemos, porque la verdadera ley que tendría que estar vigente hoy sobre bosques nativos fue archivada por la mayoría oficialista y por la oposición radical en el año 2010, traicionando todo el debate que llevó adelante la COTBN. Alertamos que vamos a movilizarnos para impedir que eso vuelva a suceder.

Llamamos a todas las organizaciones ambientales, sociales y políticas a seguir movilizadas y no entrar en el jueguito del falso proceso participativo de este Gobierno, que ni siquiera ha dado respuesta a las intervenciones judiciales que pararon la “truchada” de Audiencia Pública que querían hacer en el norte cordobés. Si no archivan el proyecto, la movilización continuará para imponer una verdadera ley que proteja al bosque nativo, que no puede venir de manos de los legisladores que gobiernan hoy la Provincia ni de los ministros que permitieron, habilitaron y profundizaron el saqueo de nuestra Provincia.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.

Sr. Salas.- Es a los efectos de aclarar una cuestión: está claro que el proceso que se llevó adelante no corresponde ni con la resolución del COFEMA ni con la ley nacional. Pero se sigue insistiendo ya que el proyecto no se ha retirado.

Cuando presentaron el proyecto de ley, tenían que contar con un mapa; y sí lo tenían, y lo tienen, ya que el mapa es, obligadamente, el resultado del proyecto de ley. Pero nos trajeron sólo el proyecto, sin el mapa, y es por las razones que mi compañero ya ha dicho.

Entonces, cuando nosotros pedimos el mapa, es el que corresponde al proyecto, el que, aun no siguiendo los mecanismos de participación, etcétera, hoy tiene estado parlamentario y se está planteando en los temarios a tratar.

Voy a dejar de pedir el mapa si mandamos al archivo el proyecto; pero, mientras este proyecto tenga estado parlamentario, tiene que venir con el mapa; si no, estamos ocultando un debate.

Evidentemente, cuando veamos el mapa y el proyecto, si es que lo siguen sosteniendo, tendrá que ser rechazado. Y si empezamos de nuevo, con un proceso como corresponde con la participación del COFEMA y todo lo demás, no necesitaremos ni el mapa que alguna vez elaboraron ni el proyecto que cuenta aún con estado parlamentario.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.

Sr. Presas.- Señor presidente: estaba mirando detenidamente el proyecto que, en su momento estuvo firmado solamente por el legislador Salas, pero al que luego se incorporaron varios legisladores. Escuchando a cada uno de ellos, no entiendo por qué lo firmaron ya que entre ellos hay grandes diferencias conceptuales sobre el proyecto en tratamiento.

Independientemente de eso, quería decirle al legislador Salas que en ningún momento se estaba tratando la Ley de Bosques, porque no existe como tal dentro de la Legislatura; no hay ninguna Ley de Bosques en tratamiento. Sí hay una Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo que nada tiene que ver con lo que usted dijo.

Segundo tema: creo que hemos dado muestras, que personalmente puedo ratificar, que durante todo este tiempo hemos venido tratando, escuchando, discutiendo, recibiendo aportes de distintos sectores de la comunidad científica, de los sectores campesinos, del foro ambiental, del INTA, de las universidades, y no creo que haya sido en vano. Creo que nos ha enriquecido, tenemos muchos elementos de trabajo para llevar adelante esta necesidad que tiene la Provincia de modificar la ley actual. Porque, como dijeron muchos de los que han hablado, con esta actual Ley 9814 tenemos serios problemas para controlar, sobre todo en la zona roja de nuestra Provincia, algunas dificultades que están ocurriendo, por esos articulados que, a veces, no están bien cerrados y permiten que algunos se metan por esos intersticios y volteen bosque, lo cual, para todos nosotros está terminantemente prohibido.

Frente a las disidencias que escuché de los mismos autores de este proyecto, quiero darles alguna tranquilidad que, creo, la han recibido durante este tiempo, por lo menos, de mi persona.

Primero, que esta herramienta –que es de lo que se está hablando- y por eso la modificación y la nueva ley, ha sido construida durante muchos meses por los técnicos, por aquellos que conocen más que todos nosotros, como es el caso del Ministerio de Ambiente en la Secretaría a su cargo, del INTA, del Ministerio de Agricultura, de las organizaciones sociales, como el foro y el Movimiento Campesino que han participado, de las universidades. Esa herramienta que fue proporcionada, no solamente al bloque oficialista sino a todos los bloques que constituyen la Legislatura de Córdoba, por quienes la implementaron, quienes la construyeron, y que -al decir de todos, inclusive, de

muchos legisladores de la oposición que lo han visto- es una herramienta muy importante. Lo dijo recién un legislador, “la Ferrari”, dicen que puede ser esto, yo no diría tanto.

–Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Pero sí digo con relación a ese mapa vectorial A4 de hace varios años atrás, que está vencido, hay una diferencia sideral que la tecnología ha superado de una manera muy importante y, lógicamente, como dice el Decreto 236, estamos en condiciones de aplicar en nuestra Provincia. Y con los dichos del Ministro de Ambiente cuando estuvo en Córdoba firmando el convenio tan importante y trascendente para nuestra Provincia como es el referido a dos parques nacionales en nuestra Provincia que superan el millón de hectáreas, lo cual aplaudimos, seguramente en poco tiempo tendremos la ley aquí para tratar y luego en el Congreso de la Nación; en ese momento el rabino Bergman, Ministro de Ambiente de la Nación, dijo que ojalá muchas provincias argentinas pudieran tener una herramienta tecnológica de esta captura como es un píxel de 30 por 30 que nos permite evaluar en un campo de 100 hectáreas, 1.000 fracciones para saber cómo es la composición vegetal, la fauna, los desniveles, el tema del agua.

En ese marco, les digo...

Sr. Presidente (Passerini).- Perdón legislador Presas, el legislador Somoza le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Presas.- No, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Continúa en el uso de la palabra legislador Presas.

Sr. Presas.- En ese sentido, planteamos algo que nos pareció importante. El mapa actual -todos lo sabemos- no está validado por la Nación, por lo tanto, para la Nación es casi inexistente. Queremos hacer a la inversa, o continuar a la inversa. ¿Cómo? Hemos pedido a la Nación, en manos del Ministro Bergman –que lo tiene hace casi dos semanas- que mire, que conozca esa herramienta y, finalmente, si es una herramienta potable, que tiene todos los usos que nosotros queremos, en este caso sí, trasladar esos elementos con las capas y llegar a ese mapa tan ansiado y que tanto la oposición reclama.

Por eso, estamos a la espera de que el Ministerio de la Nación diga sí o no, si hay que enriquecerla o mejorarla a esa herramienta para que, a partir de ahí, junto con los sectores científicos de la Provincia, fundamentalmente de la Universidad –que los vamos a volver a consultar–, ya con esa herramienta casi validada por la Nación, nos dé la tranquilidad de que el nuevo mapa no va a tener el problema que tiene el actual, que está perjudicando a cientos de productores que han presentado sus proyectos para poder cobrar este subsidio nacional.

En esta lectura y en esta continuación nosotros estamos trabajando –lo he dicho ayer y lo ratifico acá– para que una vez que termine ese proceso en la Nación, y luego el científico y técnico en las Universidades, vayamos

acompañando con todo lo que exige, obviamente, la Ley nacional 26.331, que es el proceso participativo.

En ese marco –como lo dijimos ayer en la reunión de Comisión– vamos a recorrer todos los departamentos de la Provincia de Córdoba involucrados, fundamentalmente, adonde está el bosque nativo provincial. Ahí vamos a ir y ya hemos empezado a conversar con muchos legisladores que no son de nuestro bloque para empezar a armar todo un circuito, escuchar también a aquellos que viven en el bosque, y no solamente a los que hablan del bosque. Hay muchos que hablan del bosque nativo, también queremos escuchar a los que viven en el bosque y del bosque, aquellos de los que por ahí nos acordamos cuando vence la ley o cuando hay que actualizar solamente el mapa. Me parece que esa referencia, esa historia que nos van a contar, nos va a enriquecer para saber si vamos en una buena dirección o si tenemos que corregirla.

Por ende, en este proceso participativo que ratifico, y que lo van a llevar adelante estas comisiones que intervienen en el tratamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, quédense tranquilos que trabajamos a la espera de la decisión del Ministro de Ambiente de la Nación, luego vamos a consultar y presentar la herramienta a todos los científicos que tienen que ver con las universidades, y de ahí vamos a ir a recorrer, junto con todos los legisladores, las universidades y todos aquellos a los que les interese el tema, las distintas regiones de nuestra Provincia de Córdoba.

Pero, además –y tomo la palabra y el planteo del legislador Fresneda–, quiero decirles que así como la semana que viene vamos a seguir el tratamiento de la Ley de Forestación en la Provincia, que es un elemento fundamental, que queremos que esté en vigencia para el próximo año, porque el 31 de diciembre de este año va a ser el último día que van a tener los productores de Córdoba para presentar su proyecto de reforestación en la Provincia de Córdoba, con lo cual vamos a reforestar no menos de 200 o 300 mil hectáreas–, también vamos a tomar en cuenta –y seguramente con la presencia del Ministro de Agricultura la semana que viene– la ley que tiene que ver con esto que tanto se dice y que me parece muy oportuno –e integra todo este combo que tiene que ver con el bosque y aquellos que viven en esas regiones tan postergadas de nuestra Provincia–, la Ley de Agricultura Familiar.

Por lo tanto, en esa línea de trabajo que ya he expresado claramente, la Ley Forestal que vamos a empezar a tratar definitivamente a partir de la semana que viene, y la incorporación –si acordamos los términos, que creo que no estamos lejos– de todos los legisladores de todos los bloques para que puedan ser autores de esta Ley de Agricultura Familiar, nosotros vamos a tratar que durante este año podamos tener todas estas herramientas para beneficio de aquellos que menos tienen, que más sufren y de los que no nos acordamos tan seguido.

En esta línea, señor presidente, solicito el cierre del debate y que el proyecto en cuestión pase al archivo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).– En consideración la moción formulada por el legislador Presas de cierre del debate.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

En consideración la moción de enviar al archivo el expediente 21023/L/17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-18-

Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyectos de declaración 21276, 21277, 21278, 21279, 21280, 21282, 21284, 21285, 21288 y 21291 al 21300/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo 21286/E/17, por el que se propicia la expropiación en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba para la construcción de una escuela.

Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a las Comisiones respectivas.

-19-

Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 21172, 21209, 21210, 21211, 21213, 21228, 21229, 21238, 21239, 21241, 21242, 21244, 21246, 21247, 21248, 21251, 21252, 21253, 21258, 21268, 21269, 21270, 21276, 21277, 21278 y 21285 compatibilizados, 21279, 21280, 21282, 21288, 21291, 21292, 21294,

21295, 21296, 21297, 21298, 21299 y 21300/L/17, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la mencionada comisión.

En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.

Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para la abstención del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 21251, 21252, 21270, 21277, 21278 y 21285/L/17 compatibilizados, y 21282/L/17.

Además, señor presidente, le quiero agradecer a través suyo al legislador Presas porque, efectivamente, es Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo y yo dije “Ley de Bosques”, como se la conoce, pero es un despropósito total decir que esto es una ley de bosques.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada por el legislador Salas a los proyectos mencionados.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-20-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21168/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: antes de que ponga a consideración la moción de tratamiento sobre tablas quiero proponer al bloque oficialista una moción de preferencia para que en 14 días, es decir, de acá a dos sesiones, sea tratado el proyecto. Posiblemente de esa manera me responden el pedido de informes.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de preferencia formulada por el autor del proyecto 21168/L/17 para que sea tratado dentro de 14 días.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Se incorpora al Orden del Día de la 9° sesión ordinaria.

-21-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21250/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 13 de marzo de 2017.

Al señor
Presidente del Poder Legislativo
S. / D.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 21250/L/17, expresando preocupación por el Decreto 70/2017, de modificación de la Ley de Migraciones 25.871, para la presente sesión ordinaria.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Martín Fresneda
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fresneda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: les voy a pedir que presten mucha atención porque pareciera que este tema, en Córdoba, por ahora no causa estupor, pero sí en sus comunidades migrantes, que no son pocas.

Se trata de un decreto que modifica la política migratoria de Argentina y que, bajo la excusa de mitigar o resolver un problema de inseguridad, modifica –como dije- su política migratoria. Se trata de un decreto que intenta modificar una ley que se discutió durante años en el Congreso, desde 1999 -la 25.871-, y que dejó atrás aquella vieja y nefasta “ley Videla”, retrocediendo a la Argentina a 1902, cuando la Ley de Residencia, elaborada por Miguel Cané, llevaba a la expulsión del país de muchísimos trabajadores y trabajadoras por razones políticas e ideológicas.

Traigo este tema a debate porque no podemos pensar que en Córdoba no hay migrantes, por más que sea una competencia federal; en Córdoba las comunidades peruana, boliviana, paraguaya, colombiana y de otros lugares están más que preocupadas porque se está modificando la ley de Patria Grande.

Sintéticamente, para quien no conozca este decreto, es una modificación en relación a la denegación de residencia y expulsión que, para la ley vigente,

se aplica para los migrantes que no pudieron regularizarse y que cometieron delitos graves como tráfico de estupefacientes o cuando la pena sea privativa de la libertad es mayor a 3 años; de esto se pasa a la denegación de la residencia y la expulsión para todos los migrantes, tenga o no residencia, condenados con procesamientos firmes por delitos con penas privativas de la libertad aun cumpliendo la condicional. O sea, el principio de inocencia va a empezar a valer en Argentina sólo para los argentinos, violando la Constitución Nacional y aquel principio fundamental de 1853, cuando pedíamos y decíamos que éramos un país de migrantes, quienes vinieron a enriquecer la Argentina. Ahora retrocedemos y empezamos a tener políticas de expulsión de los migrantes, que son trabajadores y trabajadoras; con este decreto están asociando al migrante con el delincuente, muy parecido a lo que está pasando en el norte del continente.

En la actual ley, la cancelación de la residencia es para quienes cometieron delito con una pena superior a 5 años, pero con la modificación es para aquellos migrantes condenados, con condena aún no firme, por cualquier delito castigado con pena privativa de la libertad.

En el trámite de expulsión en la ley actual, a partir de la notificación, el migrante tiene 30 días; a partir de la modificación el migrante va a tener 3 días para hacer su descargo. ¿Alguien que conozca un proceso administrativo o judicial me puede decir quién puede hacer un descargo en 3 días y por el solo hecho de ser imputado por cualquier tipo de delito en Argentina?

Pero más grave aún es la detención. Según la ley actual -que quieren modificar- se puede detener de manera excepcional a los migrantes con pedido de expulsión formal y consentida. Con el decreto que estoy reprochando, se puede detener en cualquier circunstancia, en cualquier momento del procedimiento y se puede llevar adelante la expulsión.

Quien está atento a esta situación, no solamente debe caer en la cuenta de que estamos frente a la posibilidad no solamente de estigmatizar al extranjero, al migrante, al trabajador, sino también en demonizarlo. Hace poco salió una nota que da cuenta de que ya empezó el proceso de expulsión del país. El gobierno pone en marcha el decreto para expulsar a los delincuentes extranjeros. Esto es gravísimo.

Les pido a todos en esta Cámara que tomen conciencia de lo que significa este decreto, bajo la excusa de que están pobladas las cárceles argentinas de extranjeros cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, e incluso la propia Iglesia Católica, se han pronunciado en contra de este instrumento, que excluye en lugar de incluir.

Tanto que peleamos y tanto que hablamos de la Patria Grande, tanto que hablamos de los hermanos latinoamericanos, pero pregunten en las embajadas y consulados de Perú, Bolivia, Paraguay, qué piensan del decreto de Mauricio Macri, que va a generar un desarraigo enorme si llegan a expulsar a hermanos latinoamericanos trabajadores, que muchas veces están informales, pero no por su responsabilidad. Sabemos muy bien que muchas veces el propio trabajo informal los lleva a cometer infracciones, y esto va a generar que los deporten, los echen y toda la familia quede en mayor marginalidad.

Les pido, por favor, que tengan en cuenta esto, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba se expida en contra de este decreto, porque todos esos

hermanos latinoamericanos que viven en Córdoba y son trabajadores, también son cordobeses y quieren este país como nosotros.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Fresneda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

-22-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 21284/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 15 de marzo de 2017.

Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21284/L/17, rechazando descuentos y ciertas medidas a los docentes que adhieren al paro.

Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: el Gobierno está agravando notoriamente el conflicto docente. Ha tomado medidas que sólo van a agravar, y lo están haciendo, como es el descuento de los días de paro y, por otro lado, están

bloqueando las plataformas de autogestión de las escuelas para que los directores den sí o sí las listas, “alcahueteando” a los docentes que han adherido al paro. Han creado un caos administrativo porque no se puede hacer un montón de acciones administrativas en la escuela porque les bloquearon las plataformas de autogestión.

Yo acuso a este Gobierno de no querer solucionar el tema docente, lo mismo que al Gobierno nacional, no lo quieren solucionar. Porque un gobierno que se viene enfrentando todos los años reclamos docentes salariales, que son impresionantemente justificados, porque una docente que recién empieza gana hoy por debajo de la línea de pobreza y si le dan el aumento que propone el Gobierno -que ahora voy a analizar- tampoco la va a superar, ni hablar de alcanzar la canasta familiar, ¿pretenden que vivan con eso?

El gobierno miente, dice que les van a dar el 19,5 por ciento y es falso, el aumento que propone es de punta a punta el 17,95 por ciento; saquen la cuenta, ni siquiera el 18 por ciento, de una supuesta inflación que ya sabemos que no va a ser del 18.

Después les quieren hacer pasar una deuda como parte de un acuerdo salarial, les deben los materiales, les deben el acuerdo del año pasado; los están estafando.

Ahora, uno se pregunta por qué el gobierno no quiere solucionar el conflicto, porque si no hubiera empezado el año pasado a afrontar esta situación, por empezar cumpliendo con el acuerdo que tenían; pero no, lo dejan hasta el último momento para después salir a acusar a los docentes de que no quieren dar clases y dejan a los chicos tirados en la calle.

El gobierno no lo quiere solucionar y esto se comparte entre todos los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, porque quieren quebrar la educación pública. Lo que hacen es, por un lado, un ajuste sobre los trabajadores, pero también para que empiece a haber cada vez más educación privada, y los docentes de la educación privada los paga el Estado. ¿Y por qué quieren que se vayan a la educación privada? Así los pueden rajar.

Esto sucedió este año en la escuela Alighieri, donde una docente osó decirle a sus compañeras –y se enteró la dirección de la escuela o los dueños- que iba a postularse como delegada y eso bastó para que la echaran. Esperaron al 23 o 24 de diciembre y la echaron.

Quieren llevar la educación al terreno privado y dejar otras escuelas que sean para pobres, contenedores de chicos de los que no puedan pagar una cuota. Están favoreciendo un negocio; esta es una política general. No quieren solucionar el conflicto docente; el gobierno provincial no sólo no lo soluciona, lo agrava.

Esta Legislatura le tiene que poner un coto y decirle que no persista en seguir coaccionando a los docentes o directores, y que les devuelvan la guita o que no se la descuenten, si es que todavía no la descontaron.

Por otro lado, quiero aclarar -y con esto termino- que ya hay resoluciones judiciales favorables en el caso de la Provincia de Buenos Aires, porque Vidal está haciendo lo mismo, aparte de meterle la policía a los docentes. Ya hay resoluciones que dicen que tienen que devolver la plata. El gobierno tiene que dejar de hostigar a los docentes en defensa de la educación pública, tienen que reponer el sueldo que los docentes reclaman e intervenir y dejar de coaccionarlos para que no hagan paro.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración del legislador Salas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

-23-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21293/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):

Córdoba, 15 de marzo de 2017.

Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 21293/L/17, que declara su beneplácito por el inicio del juicio el próximo 17 de marzo de 2017 contra el policía que fusiló a David Moreno, de 13 años, en la jornada del 20 de diciembre de 2001, en el barrio Villa 9 de Julio.

Esperamos con ansias que después de estos 15 años de maniobra dilatoria se haga justicia y exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos del asesinato de David Moreno para terminar con la impunidad.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Ezequiel Peressini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Peressini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: hoy hemos presentado un proyecto de declaración con la intención de que esta Legislatura pueda acompañar un proceso judicial que lleva 15 años de exigencias, de dilaciones, de movilizaciones y muchos reclamos.

El próximo 17 de marzo va a comenzar el juicio a quien fusiló a un niño de 13 de años en el barrio Villa 9 de Julio el 20 de diciembre de 2001.

Las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre donde los sectores populares, la clase trabajadora y el movimiento de desocupados ganaron las calles y se puso un límite a la política del gobierno de la Alianza obligando a que el Presidente De la Rúa tuviera que irse en un helicóptero, exigiendo trabajo y educación; significó uno de los procesos políticos sociales más importantes de nuestro país; pero también significó que la única respuesta que el gobierno pudo dar en ese momento fue la represión, lo que significó el asesinato de 33 personas por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados nacional y provinciales, muchas de las cuales se mantienen hasta el día de hoy en impunidad.

Una de ellas es el jovencito David Moreno que, con tan sólo trece años, salió a correr desde su casa a un gran supermercado que estaba a tres cuadras porque en su barrio había hambre, miseria, ausencia del Gobierno y del Estado. Resulta que en ese momento las organizaciones habían conseguido que en ese supermercado se entregara comida porque, como saben, la desocupación y el hambre habían ganado grandes extensiones de la población; resulta que allí se encontraba formada la guardia de infantería y, sin ningún tipo de medidas, resolvió a disparar con balas de plomo a quienes se manifestaban, y allí, medio jugando entre la manifestación, se encontraba David, que recibió balas de plomo por la espalda y murió de inmediato.

Esto pasó hace más de quince años y la Justicia hasta el momento no ha dado una respuesta satisfactoria a la familia, a sus amigos y a las organizaciones que tenemos a David Moreno como una bandera de la lucha por la justicia contra la represión del aparato policial y contra la impunidad con la que se maneja este aparato represivo, que tiene casos de gatillo fácil extendidos en toda la Provincia, como ha sucedido en Carlos Paz hace un tiempo, en donde la misma policía que asesinó a David Moreno asesinó a Franco Amaya, y son muchísimos los casos de gatillo fácil en nuestra Provincia.

Creíamos que los legisladores iban a reconocer el problema e iban acompañar esta declaración, porque queríamos acercársela el próximo viernes a la familia, porque es una conquista muy importante poner al policía que lo fusiló en el estrado de la Justicia, y queremos exigir juicio y castigo a los responsables materiales y políticos para que, efectivamente, haya justicia por David.

Lamentamos que esta Legislatura haga oídos sordos a estos reclamos democráticos y populares y siga posicionándose del lado de los policías que reprimen y, en este caso, concretamente, asesina a un niño de trece años, poniéndose siempre del lado de los poderosos.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Peressini.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Presas a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 20 y 19.

***Nora Mac Garry – Graciela Maretti
Subdirectorras del Cuerpo de Taquígrafos***